

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA

E.A.P. DE DERECHO

Mecanismos de celeridad procesal

principio de oportunidad y proceso de terminación anticipada en el
código procesal penal de 2004 y su aplicación en el distrito judicial de
Huaura

TESIS

Para optar el Título Profesional de Abogado

AUTOR

Jimmy Alexander Benites Tangoa

ASESOR

Víctor Cubas Villanueva

Lima - Perú

2010

Dedico este trabajo de investigación a todas aquellas personas que me apoyaron para la realización del mismo. Sin duda han sido muchas, entre ellas no puedo dejar de mencionar a mi madre por su infinita paciencia y apoyo; al doctor Víctor Cubas Villanueva y a Aldo León Patiño de quienes he recibido gran apoyo.

A todos ellos, mi respeto y agradecimiento eterno.

INTRODUCCIÓN.....	1
MECANISMOS DE CELERIDAD PROCESAL: PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD Y PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE 2004 Y SU APLICACIÓN EN EL DISTRITO JUDICIAL DE HUAURA.....	3

CAPÍTULO I

I. GENERALIDADES:.....	3
1. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DE 1940.....	4
1.1. EL MODELO INQUISITIVO.....	5
2. EL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE 1991.....	8
2.1. EL MODELO ACUSATORIO.....	9
- La Oralidad.....	11
- La Publicidad	11
- La Contradicción.....	11
- La Igualdad de Armas.....	12
- El Derecho de Defensa.....	12
- EL Derecho al Debido Proceso	14
- El Derecho al Juez Predeterminado por la Ley.....	14
- La Imparcialidad del Juez.....	15
- La Presunción de inocencia	16
- La Celeridad Procesal	17
2.2. EL MODELO MIXTO.....	17
2.3 ENFOQUE DE LA PROBLEMÁTICA.....	19
- FALTA DE UNIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO PENAL.....	20
3. FUNDAMENTOS PARA LA REFORMA.....	21
4. EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL.....	22
4.1. LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL.....	23
4.2. EL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE 2004.....	25

5.	ROL DE LOS OPERADORES EN EL NUEVO MODELO.....	25
5.1.	RESPECTO DE LO JURISDICCIONAL.....	26
5.2.	RESPECTO DEL MINISTERIO PÚBLICO.....	30
5.3.	RESPECTO DE LO POLICIAL.....	33
5.4.	RESPECTO DE LA DEFENSORÍA DE OFICIO.....	34
6.	APLICACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL EN EL DISTRITO JUDICIAL DE HUAURA.....	36
6.1.	PROBLEMÁTICA DEL DISTRITO JUDICIAL DE HUAURA A LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL NCPP.....	38

CAPÍTULO II

I.	LOS PROCESOS ESPECIALES EN EL NCPP.....	41
1.	EL PROCESO INMEDIATO.....	43
1.1.	DELITOS A LOS QUE SE APLICA EL PROCESO INMEDIATO.....	45
2.	EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA.....	45
2.1.	LA AUDIENCIA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA.....	49
2.2.	EL ACUERDO.....	50
2.3.	EL JUZGAMIENTO.....	50
	NATURALEZA PREMIAL DEL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA.....	51
3.	EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD.....	52
3.1.	DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN OTROS PAÍSES.....	55
3.2.	ANTECEDENTES Y MARCO NORMATIVO.....	57
3.3.	FORMA DE MANIFESTACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD.....	58
3.4.	EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL.....	59
3.5.	REQUISITOS PARA LA APLICACIÓN DE PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD.....	62
-	CONVENCIMIENTO DEL DELITO Y DE LA VINCULACIÓN DE SU AUTOR O PARTÍCIPE.....	63
-	CONSENTIMIENTO EXPRESO DEL IMPUTADO.....	64
-	FALTA DE NECESIDAD DE PENA.....	65
-	FALTA DE MERECEIMIENTO DE PENA.....	65
-	CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES POR MÍNIMA RESPONSABILIDAD O CULPABILIDAD.....	65

- EXCLUSIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS.....	66
- OBLIGACIÓN DE PAGO O ACUERDO DE LA REPARACIÓN CIVIL.....	6 7

CAPÍTULO III

LOGROS OBTENIDOS CON LA APLICACIÓN DEL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL EN EL DISTRITO JUDICIAL DE HUAURA.....	68
--	----

1. EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA EN EL DISTRITO JUDICIAL DE HUAURA Y EN TODO EL TERRITORIO PATRIO.....	68
---	----

1.2. LOGROS OBTENIDOS CON LA APLICACIÓN DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA EN HUAURA.....	68
---	----

- REDUCCIÓN DE LA SEXTA PARTE DE LA PENA.....	71
---	----

2. EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN EL DISTRITO JUDICIAL DE HUAURA.....	7 2
---	-----

3. MECANISMOS DE CELERIDAD PROCESAL.....	72
--	----

4. LOGROS OBTENIDOS CON LA APLICACIÓN DE MECANISMOS DE CELERIDAD PROCESAL EN EL DISTRITO JUDICIAL DE HUAURA.....	74
--	----

4.1. CASOS RESUELTOS Y DISMINUCIÓN DE LA CARGA PROCESAL.....	74
--	----

4.2. CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES DE JUSTICIA PENAL.....	75
--	----

4.3. RESPECTO DEL DESCONGESTIONAMIENTO DE LOS CENTROS CARCELARIOS.....	75
--	----

4.4. RESPECTO DE LA RAPIDEZ DEL PROCESO PENAL.....	75
--	----

ANÁLISIS DE LOS INFORMES SOBRE LA APLICACIÓN DEL NCPP.....	76
--	----

CAPITULO IV

ANÁLISIS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MECANISMOS DE CELERIDAD PROCESAL: TERMINACIÓN ANTICIPADA Y PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN EL DISTRITO JUDICIAL DE HUAURA.....	83
--	----

1. CRITICA A LOS MECANISMOS DE CELERIDAD PROCESAL.....	83
1.1. VULNERACIÓN AL DERECHO DE DEFENSA.....	83
1.2. VULNERACIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.....	84
1.3. DISMINUCIÓN DE LAS ETAPAS DEL PROCESO PENAL.....	86
2. APORTES.....	8 6
2.1. TÉRMINO “MECANISMOS DE CELERIDAD PROCESAL”	86
2.2. MODIFICACIÓN DEL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 468 NCPP SOBRE NORMAS DE APLICACIÓN DEL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA.....	87
2.3. CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA.....	89
2.4. CARÁCTER PRIVADO DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA.....	90
3. CONCLUSIONES.....	91
3.1. RESPECTO DE LA REFORMA DEL PROCESO PENAL Y LA IMPLEMENTACIÓN EL NCPP.....	91
3.2. RESPECTO DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL.....	92
3.3. RESPECTO DE LOS MECANISMOS DE CELERIDAD PROCESAL.....	9 2
3.4. RESPECTO DE LOS APORTES.....	93
Bibliografía.....	94
Anexos.....	97

INTRODUCCIÓN:

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad tratar el problema de la dilación en los procesos penales causada por diversos factores como por ejemplo el excesivo formalismo o ritualismo, la falta de unificación de la normativa procesal penal y la inconstitucionalidad del proceso sumario, y cómo ello se puede solucionar con la aplicación de los mecanismos de celeridad procesal, especialmente el de terminación anticipada que sumado al principio de oportunidad hemos denominado ***mecanismos de celeridad procesal*** en tanto coadyuvan a la celeridad del proceso penal resolviendo rápidamente los procesos menos complejos para otorgarle mayor tiempo a los procesos de mayor complejidad.

Sin duda, alguna el mayor aporte que vislumbra el ciudadano común en la reforma del proceso penal peruano es la celeridad con que se realizan los procesos penales con la aplicación del código procesal penal de 2004, la misma que no debe ser irrestricta sino que debe lograrse sin violentar el derecho. Esta cualidad ha sido alagada innumerables veces y resaltada por muchos hombres y mujeres de derecho pero debemos entenderla como creación humana y por tanto falible y modificable, esto es, que a nuestro humilde entender, creemos que deben existir unas pequeñas modificaciones en tanto que buscamos al igual que la comunidad jurídica, un proceso penal moderno, respetuoso de los derechos fundamentales de la persona humana, célere y que responda a las expectativas del ciudadano para evitar la búsqueda de la justicia por mano propia; adelantándonos diremos que a pesar del **acuerdo plenario N° 5-2008/CJ-116**, no estamos de acuerdo en que solamente se pueda aplicar el proceso de terminación anticipada hasta antes de que el fiscal formalice acusación porque ello es contrario al espíritu del nuevo modelo procesal penal.

Continuando con el comentario de la parte estructural del presente trabajo de investigación diremos que consta de cuatro capítulos, en el primero de ellos tratamos generalidades como los principios que constituyen pilares del sistema procesal penal, sus sistemas a través de la historia y enfocamos la problemática del mismo; en el capítulo segundo tratamos el tema de los

procesos especiales como elemento importantísimo para lograr la celeridad del proceso penal moderno pero incluimos – salvando las distancias- al principio de oportunidad. El tercer capítulo lo titulamos logros obtenidos con la aplicación del proceso de terminación anticipada y principio de oportunidad en el nuevo código procesal penal en el distrito judicial de Huaura donde mostramos datos estadísticos que pueden dar luces de lo beneficioso que resulta la aplicación de los mecanismos en cuestión y terminamos haciendo un análisis sobre el funcionamiento de los mismos bajo el título del capítulo cuarto: análisis de los mecanismos de celeridad procesal, en el que plasmamos nuestra contribución respecto a las modificaciones que creemos pertinentes.

Con el presente trabajo, además de optar el título profesional de abogado, pretendo realizar un aporte para lograr un mejor proceso penal que oiga al ciudadano común porque el derecho constituye una herramienta para el control social y como tal, la sociedad debe aceptarlo.

MECANISMOS DE CELERIDAD PROCESAL: PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD Y PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE 2004 Y SU APLICACIÓN EN EL DISTRITO JUDICIAL DE HUAURA.

CAPÍTULO I

I. GENERALIDADES:

Lograr un correcto análisis de los beneficios y/o perjuicios que trae consigo la aplicación del proceso de terminación anticipada y del principio de oportunidad como mecanismos de celeridad del nuevo proceso penal¹ implica entender primero la problemática por la que atraviesa nuestro sistema penal; el mismo que se encuentra conformado por el derecho penal, derecho procesal penal y derecho de ejecución penal.

Iniciamos haciendo notar que no existe concordancia² entre las áreas del sistema penal que se plasman en los códigos penal, procesal penal³ y de ejecución penal. Dicha falta de concordancia encuentra sustento en la pluralidad de sistemas que nuestros códigos plantean; vale decir, que mientras el código de procedimientos penales del año 1940 presenta un sistema mixto privilegiando el inquisitivo; el código procesal penal año 1991 es tendencialmente acusatorio y el código procesal penal del año 2004 es acusatorio garantista; ello hace clara muestra, de que nuestro ordenamiento procesal penal se encuentra desmembrado y sobretodo sin una directriz única exigida por la modernidad: ***un solo sistema procesal penal.***

¹ Evitando de esta manera un proceso engorroso que implica un costo elevado para el Estado al activar la maquinaria jurisdiccional así como también para los justiciables

² Esta concordancia se refiere al hecho de que contamos con un código de procedimientos penales del año 1940 que privilegia un sistema mixto, un código procesal penal del año 1991 que presenta una tendencia acusatoria y un código procesal penal del año 2004 acusatorio garantista.

³ Código de procedimientos penales de 1940, código procesal penal de 1991 y el novísimo código procesal penal de 2004.

A continuación comentaremos cada uno de nuestros códigos en materia procesal penal para dar luces de la problemática a que nos referimos.

1. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DE 1940.

El Código de Procedimientos Penales fue dado en el Gobierno del Presidente Oscar R. Benavides por Ley N° 9024; consta de un Título Preliminar de ocho artículos en los que se trata sobre las etapas del proceso, formas de la acción penal, acción penal derivada del proceso civil, cuestiones previas y prejudiciales, excepciones: clases, trámite y efectos, delitos cometidos por peruanos en el extranjero, delitos cometidos por extranjeros e improcedencia de la acción penal por principio de la Cosa Juzgada.

Destacamos que el Título Preliminar no hacía mención alguna sobre lineamientos generales, principios o garantía alguna, lo que refleja su tendencia al modelo inquisitivo aun cuando presenta un sistema mixto. Este Código consta de cuatro Libros; el primero: **DE LA JUSTICIA Y DE LAS PARTES** que a su vez consta de siete títulos (Competencia, Recusación, Ministerio Público, Juez Instructor, Parte Civil, Poder Judicial y Ministerio de Defensa); el segundo: **DE LA INSTRUCCIÓN** que consta de nueve títulos (Principio de la Instrucción. Citación y detención del inculcado, Embargo de bienes del inculcado y de terceros, Libertad Provisional, De la Instructiva, Testigos, Peritos, Diligencias Especiales, Fin de la Instrucción, De la Instrucción contra Inculcados ausentes); el tercero: **DEL JUICIO** que contiene cinco títulos (Tribunal Correccional, Actos Preparatorios de la Acusación y de la Audiencia, Audiencias, Sentencias y Recurso de Nulidad); y el Libro cuarto respecto de los **PROCEDIMIENTOS ESPECIALES**⁴, que cobran especial importancia en tanto que surgen para dar solución al problema de la sobrecarga procesal y la dilatación de los procesos; consta de once títulos (Procedimiento Especial para Delitos de Calumnia, Difamación, Injuria y Contra el Honor Sexual, Juicios por

⁴ Merece especial mención en tanto que implica restricción de garantías porque no funciona el modelo mixto.

Delito de imprenta y medios de publicidad, Juicio contra reos ausentes, De la fuga del reo, Juicio por Faltas, Cumplimiento de Sentencias, De la rehabilitación de los condenados, Extradición, Recurso de Hábeas Corpus, Recurso de Revisión y Disposiciones Finales).

El código de procedimientos penales plantea un proceso penal **tipo** conocido como proceso **”ordinario”**, el mismo que se encuentra regido por un principio básico: **“el principio de legalidad”** que es la automática e inevitable reacción del Estado a través del Ministerio Público que dirige la investigación realizada por la policía, para que frente a la hipótesis de la comisión de un hecho delictivo se presente ante los órganos jurisdiccionales, reclamando la investigación, el juzgamiento y, si corresponde, el castigo del delito que se hubiere logrado comprobar⁵. De esta manera, gracias al principio de legalidad, el Fiscal no puede dejar de iniciar la acción penal cuando sea debido. Pero tampoco se trata de poner en marcha un proceso penal cuando no se deba; por tal razón, cuando el Fiscal se encuentra ante una circunstancia en la que debe ejercitar la acción penal, no puede dejar de hacerlo, además, cuando ya la inició no puede retractarse⁶. El principio de legalidad implica sobretodo la inclinación a la **literalidad de la norma y el excesivo formalismo**, el mismo que conlleva a la **SOBRECARGA PROCESAL** que impide el correcto trabajo de los operadores de justicia penal y trae consigo la dilación del proceso. Para combatir esta problemática se crea el Ministerio Público en el año 1981, otorgando **“facultades discrecionales”** a los fiscales para que mediante el archivamiento provisional y el definitivo se logre el descongestionamiento de la carga procesal y se aceleren los procesos.

La sobrecarga procesal ha sido sin duda alguna uno de los mayores problemas de nuestro sistema procesal penal; pero no el único; también existe el hecho de que el código de procedimientos penales presenta un sistema mixto y por tanto su fase inquisitiva favorece la vulneración de derechos de la persona humana puesto que no brinda las garantías mínimas para la protección de los derechos del justiciable. El modelo en mención contribuye

⁵ Víctor CUBAS VILLANUEVA; EL PROCESO PENAL; Palestra Editores; 6ta edición; p.248 y 249.

⁶ estas son las características del principio de legalidad, que conocemos como **inevitabilidad e irretractabilidad**.

con el hacinamiento en los centros penitenciarios, favorece la corrupción y privilegia la escrituralidad que contribuye con la sobrecarga procesal y por tanto con la dilación del proceso penal.

1.1. EL MODELO INQUISITIVO.

El proceso penal basado en un modelo inquisitivo resulta ser un sistema que restringe el derecho de Defensa, en él cobra preponderancia la figura del Juez, privilegiando la dualidad de funciones, privilegia la confesión, dilata el proceso por el ritualismo, el formalismo y la escrituralidad y favorece la corrupción por la falta de publicidad.

Respecto de la evolución del modelo inquisitivo, dice el profesor Víctor Cubas Villanueva, que prevaleció fundamentalmente en Europa durante la edad media⁷ y cobró características diferentes respecto de cada país; entre ellas resaltamos las siguientes:

- Que la acción penal era prerrogativa del Príncipe y no requería la intervención del acusador para que el Estado proceda. El lugar del acusador es ocupado por agentes estatales que informan al magistrado inquiriente sobre la comisión del delito y la persona de los delincuentes.
- Durante este proceso penal el acusado es segregado de la sociedad mediante la **PRISION PREVENTIVA**.
- La ubicación, recepción y valoración de la prueba es facultad exclusiva del Juez.
- Así también el Juez es quien dirige exclusivamente el proceso y no está sujeto a una posible recusación.
- El Derecho de Defensa se encuentra restringido.
- El proceso se realiza de manera escrita y de forma reservada tanto para la sociedad como para el procesado, lo que denota la clara limitación al Derecho de Defensa en tanto el imputado no puede

⁷ EL PROCESO PENAL; CUBAS VILLANUEVA, Víctor; 6ta edición; Palestra Editores; 2006; p. 89.

preparar su defensa porque no está bien informado de los cargos que pesan en su contra.

- Se reconocen sanciones coercitivas extraordinarias.
- La decisión no se toma sobre la base del convencimiento moral, sino de conformidad al sistema de *pruebas legales*^{8 9}.

Según Percy Chocano Nuñez las características del Sistema Inquisitivo son la religiosidad, la oscuridad, la preeminencia de la acusación sobre la defensa, el **In dubio contra reo**, la tortura como método, la confesión como **Regina probatio**, la verdad formal como objetivo, la escrituralidad, la dicotomía del proceso en instrucción y juzgamiento, el arbitrio judicial, la concentración de la función de acusar, defender y juzgar en la persona del inquisidor¹⁰.

A nuestro entender, las características del modelo procesal penal inquisitivo plasmado en el código de procedimientos penales de 1940 son:

- **La escrituralidad:** que es opuesta a la oralidad y que causa dilaciones en los procesos como consecuencia del excesivo formalismo que se convierte en una suerte de freno para el proceso además de llenar los juzgados de un sin fin de escritos que se manifiestan en sobrecarga procesal.
- **La delegación de funciones del juez:** Se produce como resultado de que el proceso no sea puramente público de manera tal que el juzgador al no encontrarse vigilado por la sociedad (mediante la publicidad de las audiencias) delega a practicantes y secretarios para que se encarguen de redactar sentencias constituyendo esta delegación en un actuar altamente dañino al ser el juez y no otro quien tiene la facultad y la obligación de administrar justicia y por tanto de redactar una sentencia. La delegación de funciones es resultado también de la falta de

⁸ Prueba legal o tasada implica la existencia de un sistema de apreciación de las pruebas con criterios ya establecidos por el legislador.

⁹ Víctor CUBAS VILLANUEVA; EL PROCESO PENAL; Palestra Editores; 6ta edición; p.90

¹⁰ XVIII CONGRESO PANAMERICANO DE DERECHO PROCESAL en la ciudad de Arequipa; LOS DERECHOS HUMANOS COMO LIMITE A LA ACTIVIDAD PROBATORIA; CHOCANO NUÑEZ Percy; 2005.

inmediación que implica la ausencia del juzgador en la dirección del proceso, cumpliendo únicamente la labor de sellar y firmar las sentencias que sus delegados redactan.

- **La dualidad de funciones:** Causa dilaciones y duplica esfuerzos porque la misma tarea de investigación que realiza el fiscal y la policía nacional dirigida por el primero, es repetida por el Poder Judicial en la etapa de instrucción por lo que en la gran mayoría de casos no se producen o actúan nuevas pruebas sino que se limitan a repetir las diligencias realizadas por la policía.

A decir del proceso penal sumario¹¹ también se hace notar el modelo inquisitivo. Ocurre que las funciones de investigación y juzgamiento se concentran en la única persona del Juez, vulnerando de esta manera el principio de imparcialidad de la administración de justicia; es decir, que el Juez que investiga es el mismo que juzga; lo que revela la clara parcialidad del juzgador al asumir funciones del fiscal. Esto ha sido duramente criticado por la doctrina que con certeza ha dicho que es anticonstitucional.

2. EL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE 1991

El código procesal penal de 1991 surge con el ánimo de reformar el código de 1940 y con la clara intención de lograr descongestionar el sistema judicial y el sistema penitenciario; se aprueba por Decreto Legislativo 638 del 27 de abril de 1991 y sólo entraron en vigencia algunos artículos puesto que los encargados de la implementación de este código expresaron literalmente: Que resulta conveniente disponer la vigencia inmediata de algunas normas de este código, como son: el principio de oportunidad regulado en el artículo 2°;

¹¹ El proceso sumario encuentra su razón de ser en el hecho de que los procesos menos importantes se realicen con prontitud, lo que conlleva al descongestionamiento de la carga procesal. Sin embargo no es tan bueno como parece, pues muchos autores han tratado ya la inconstitucionalidad del proceso sumario en tanto que en este proceso se confunden las funciones de manera tal que no existen roles definidos entre quien acusa y quien juzga. Esto es pues característica de un sistema concordante con formas de Estados totalitarios y gobiernos de dictadura.

algunas prescripciones destinadas al descongestionamiento de los establecimientos carcelarios y a la limitación de los supuestos para la restricción de la libertad del imputado, artículo 135º, motivación de la detención, artículo 136; libertad por exceso de detención, artículo 138º; supuestos de conversión de la comparecencia, artículos 143º al 145º y a la libertad provisional, artículos 182º al 188º; pues es objetivo del Gobierno garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos mediante un efectivo control social...¹².

Como ya dijimos, es clara la intención del código del 91: descongestionar los centros penitenciarios; y aunque en buena cuenta lo que se buscó fue una reforma no se logro mas que el desmembramiento del ordenamiento jurídico procesal penal dejando de lado la unificación tan ansiada; esto es, que el proceso penal se rige al amparo de un ordenamiento procesal que tiene por un lado posturas inquisitivas que favorecen la violación del contenido esencial de los derechos fundamentales y por otro posturas acusatorias como la de la aplicación parcial del código procesal penal de 1991.

2.1. EL MODELO ACUSATORIO.

El modelo acusatorio es históricamente anterior al modelo inquisitivo y representa básicamente el espíritu del juicio en tanto que lleva consigo la idea del enfrentamiento entre dos partes contrapuestas para que su *litis* sea resuelta por un tercero llamado Juez; por tanto el desarrollo del proceso es claramente real y no simbólico.

Este modelo procesal penal es respetuoso de la Constitución y del desarrollo de un proceso sin violación de derechos que además brinda las garantías necesarias para tutelar dichos derechos.

Según el doctor CUBAS VILLANUEVA, tiene por características:

¹² CÓDIGO PROCESAL PENAL DE 1991; Decreto Legislativo 638. CÓDIGOS GRIJLEY 7mº edición; pag. 321.

- Que la acción corresponde a la sociedad, mediante la acusación que es libre y cuyo ejercicio se confiere no solamente al ofendido y a los parientes, sino a cada ciudadano. En todo evento sin previa acusación, no existe juicio.
- La libertad personal del acusado es respetada hasta el instante en que se dicta sentencia condenatoria.
- La etapa contradictoria del juicio se realiza con igualdad absoluta de derechos y poderes entre acusador y acusado; lo que refleja la igualdad de armas en el proceso.
- La oralidad, la publicidad y la concentración son características del debate.
- La presentación de las pruebas constituye una carga exclusiva de las partes.
- El juez es popular y recusable asumiendo un rol pasivo durante el juicio, le corresponde valorar la prueba que rindan las partes.
- El veredicto se fundamenta en el libre convencimiento.¹³

Por otro lado, CHOCANO NUÑEZ expresa que las características del sistema acusatorio son la publicidad, la oralidad, la presunción de inocencia, el libre convencimiento, la libertad objetiva de la prueba, el derecho a guardar silencio, el derecho de defensa, la prohibición de autoincriminación forzada y el juez natural.

El modelo procesal penal acusatorio se conduce por el sendero del respeto a los derechos fundamentales, por conducir un procedimiento con sujeción a un debido proceso y brindando las garantías mínimas necesarias para la realización del mismo con arreglo a lo que la modernidad exige: el absoluto respeto a los derechos de la persona humana expresada en nuestra Constitución Política del Estado y Los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por el Perú; los mismos que tienen rango de Ley.

Resaltamos como características principales:

¹³

Víctor CUBAS VILLANUEVA; EL PROCESO PENAL; Palestra Editores; 6ta edición; p.87.

- La Oralidad:

Que es la contraparte de la escrituralidad e implica la reducción de los escritos de manera tal que las audiencias en general y el juicio oral en particular se desarrolle en el ámbito del debate y por tanto del contradictorio que trae consigo la obligación de una mejor preparación intelectual y de acumulación de conocimiento así como preparación en la litigación oral tanto del abogado defensor como del fiscal. La oralidad trae como consecuencia la celeridad del proceso sin el freno que resultaba la escrituralidad.

- La Publicidad:

Es la realización de las audiencias a vista y paciencia de la sociedad, vale decir que nadie puede ser impedido de ingresar a ver cómo se desarrolla el proceso penal; lo que se convierte en la supervisión del proceso penal por parte de la sociedad. Es obvio que los ciudadanos de un país con un Estado de Derecho se preocupen por conocer cómo se resuelven los conflictos de los mismos y por tal razón no pueden ser privados de tal conocimiento. Así pues la publicidad se convierte en una herramienta de lucha contra la corrupción porque al realizarse las audiencias a viva vista de los ciudadanos el juez va a sentirse controlado y fiscalizado. Ello contribuye a la recuperación de la credibilidad de la sociedad en las instituciones de justicia y operadores del derecho.

La garantía de publicidad de las audiencias resulta ser una importantísima herramienta para la aplicación del modelo acusatorio. Significa que las audiencias se realicen a vista y paciencia de los ciudadanos y no a puertas cerradas; lo cual trae como consecuencia que se perjudique la corrupción en tanto que la publicidad constituye una suerte de fiscalización por parte de la sociedad que se interesa por conocer cómo el Estado a través del Poder Judicial soluciona los conflictos.

- La Contradicción

La garantía de la contradicción constituye la esencia del sistema procesal penal acusatorio en tanto que no puede imaginarse un sistema

adversarial sin dos partes contrapuestas que esgriman sus argumentos; se refiere al choque de contrarios del cual nace la luz. Constituye el elemento esencial **si ne qua non** para la existencia de un proceso en que el derecho de defensa toma especial importancia en tanto que no se trata simplemente de una parte que acuse mientras la otra se queda estática esperando su suerte, sino que se trata de la confrontación en igualdad de armas para que el juez llegue a la verdad.

La garantía de contradicción es consustancial al modelo acusatorio; busca la lucha de las partes contrapuestas de la cual surge la verdad. Por tanto no puede hablarse de un sistema acusatorio sin contradicción, ni sin derecho de defensa.

- La Igualdad de Armas

Esta garantía está íntimamente ligada a la de contradicción en tanto que implica asegurar el equilibrio, desechando la arbitrariedad y parcialidad. Implica que los contrarios en el proceso se encuentren en las mismas condiciones y con las mismas posibilidades de argumentación, ataque y defensa. Es tarea del juzgador dirigir el proceso con respeto a la garantía de la igualdad en tanto que su favorecimiento a una de las partes significaría su parcialización y por tanto la desnaturalización del proceso penal de corte acusatorio.

- El Derecho de Defensa

Es el derecho indispensable para la existencia del sistema acusatorio; consiste en la facultad de toda persona de contar con el tiempo y los medios necesarios para ejercer su defensa en todo proceso donde se vea involucrado.¹⁴ por tanto está íntimamente ligado a la garantía de la contradicción y a la igualdad de armas en el proceso; Es la facultad de las partes de sostener sus posiciones y contradecir los fundamentos del contrario¹⁵. Pertenece al rubro de las garantías genéricas como la presunción

¹⁴ EL PROCESO PENAL; Víctor CUBAS VILLANUEVA; palestra; 6ta edición.

¹⁵ El Proceso Penal. Víctor CUBAS VILLANUEVA. Palestra Editores. Lima. 2006. P.49.

de inocencia, el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva; y constituye una importante faceta de la garantía de contradicción. Implica un doble sentido; en el primero se refiere a una suerte de restricción impuesta al juzgador de manera tal que no puede actuar en el proceso a espaldas de esta y en el segundo sentido viene a ser el derecho propio del imputado (sujeto pasivo del proceso), vale decir, derecho subjetivo de la parte que le permite actuar en el proceso de manera tal que se produzca la elemental garantía de contradicción. El derecho de defensa conjuntamente con la acusación del fiscal constituyen los elementos esenciales de la dialéctica, de la lucha de contrarios de la cual surge la verdad. Al amparo de esto podemos decir que sin la existencia del derecho de defensa, sino solamente, de la acusación no se podría hablar de **PROCESO** sino de una condena asegurada.

El derecho de Defensa implica la posibilidad del imputado (que es el que hace uso de ella en el proceso penal) de participar en el proceso por medio propio- autodefensa- o mediante el uso de la defensa técnica para contrarrestar los ataques del sujeto activo del proceso; es decir, contar con un abogado defensor desde el inicio mismo de las investigaciones.

Se trata de un derecho expresado constitucionalmente en el artículo 139 apartado 14 en el que se expresa el principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Continúa diciendo que toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o las razones de su detención además que tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde que es citada o detenida por cualquier autoridad¹⁶.

Si bien el imputado es un sujeto pasivo porque no tiene la carga de la prueba; la aplicación del derecho de defensa lo convierte en un sujeto activo en calidad de sujeto procesal pasivo. Es decir, es pasivo en tanto que el fiscal es quien debe probar la culpabilidad del imputado y no él mismo quien debe probar su inocencia; y es activo en el sentido que puede participar en el proceso sin restricción alguna mediante la autodefensa o la defensa técnica.

¹⁶ Artículo 139 apartado 14 de la Constitución Política del Perú.

Tanta es la importancia de este derecho que no se puede restringir por ejemplo la reunión del imputado con su abogado defensor ni siquiera en el caso de la incomunicación.

Negar el Derecho de Defensa es por tanto negar el proceso penal en sí, por cuanto la realización del proceso sin este derecho es ir hacia una condena predeterminada.

- **EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO.**

La garantía del debido proceso es conocida como la garantía de garantías, se trata de aquella que tutela los demás derechos. Forma parte de las garantías genéricas como la presunción de inocencia, el derecho de defensa y la tutela jurisdiccional efectiva; Es el derecho por medio del cual se protegen otros derechos en el proceso. Como expresa César San Martín Castro se trata de una especie de garantía madre y también de una garantía *caja de sastre*¹⁷ porque en ella inclusive se encuentran inmersas aquellas garantías que no encuentran asidero alguno. Al respecto es preciso notar que cuando los abogados quieren alegar que se ha afectado algún derecho y no encuentran la palabra correcta hacen referencia a ***la vulneración del debido proceso***.

Nuestra legislación expresa que toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso¹⁸.

- **EL DERECHO AL JUEZ PREDETERMINADO POR LA LEY.**

El Derecho a ser juzgado por un Juez Predeterminado por Ley es una de las mayores garantías de un proceso penal justo y respetuoso de los derechos de la persona humana. Constituye parte de las garantías de la jurisdicción al

¹⁷ Cesar SAN MARTIN CASTRO; como expositor en el diplomado sobre el Nuevo Código Procesal Penal organizado por el INPECCP.

¹⁸ Artículo I del TÍTULO PRELIMINAR del código procesal civil peruano.

igual que la unidad y exclusividad de la jurisdicción y la imparcialidad e independencia judicial. También se le denomina derecho al **JUEZ NATURAL**. Significa que ninguna persona debe ser juzgada por Juez que no este determinado con anterioridad a la comisión del ilícito penal, De esta manera se reprime la creación de los juzgados “ad hoc” o juzgados especializados que se crean para hacerse cargo de delitos cometidos con anterioridad a la creación de dicho juzgado.

Este derecho al Juez Legal, a decir del profesor Vicente Gimeno Sendra, encierra una doble garantía. Por un lado, para el justiciable a quien se le asegura que en momento alguno podrá ser juzgado por un órgano distinto de los que integran la jurisdicción; y, por otro lado, constituye una garantía propia de la jurisdicción; pues impide que el Poder Ejecutivo disponga a su antojo la constitución y funcionamiento de los tribunales¹⁹.

Nuestra Constitución Política hace referencia a este principio en su artículo 139 explicando que son principios y derechos de la función jurisdiccional (...) en su apartado 3.: La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Explica que ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas a tal efecto, cualquiera sea su denominación.

- **LA IMPARCIALIDAD DEL JUEZ.**

La imparcialidad del juez forma parte de las garantías de la jurisdicción y constituye otro de los principios básicos del sistema inquisitivo porque implica que el juzgador sea un tercero que llega al proceso sin conocer de él y por tanto, el mismo, no favorece a ninguna de las partes sino que trata de ser equilibrado y otorgar igualdad de oportunidades; es decir, el juzgador no puede hacer preguntas conducentes a la incriminación del procesado porque estaría asumiendo la función del fiscal pero tampoco puede inducir o influenciar para

¹⁹ Víctor Cubas Villanueva; EL PROCESO PENAL; Palestra Editores; Lima-2006;p 62 citando a Gimeno Sendra, Vicente.; Constitución y Proceso; Tecnos; Madrid; 1998; p. 56

que del juicio se desprenda la inocencia del procesado porque estaría poniéndose en la posición de la defensa.

De esta manera, el juzgador debe defender la igualdad de armas en el proceso, lo que obviamente implica un nivel elevado de inteligencia y preparación.

Esta garantía se encuentra ligada a la garantía de la independencia del juez; es decir, la garantía que impide la injerencia o presiones de cualquier tipo por el superior u otro. De lo que se trata es que el juez penal resuelva sin presiones políticas o de otra índole, teniendo en cuenta la libre convicción y el juicio razonable.

- LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.

La presunción de inocencia es una garantía genérica que constituye uno de los pilares del sistema inquisitivo en tanto que se refiere a que el detenido, imputado y procesado mantiene su estado de no autor hasta que no sea declarado así por una sentencia judicial firme; es decir, ninguna persona puede ser considerada autora de la comisión de un delito ni tratado como tal, por persona alguna, hasta que una sentencia judicial firme lo declare así.

La afirmación que toda persona es inocente mientras no se declare judicialmente su responsabilidad, es una de las más importantes conquistas de los últimos tiempos²⁰.

Respecto de la presunción de inocencia nuestra Constitución Política expresa en su artículo 2 inciso 24 literal “e”, que toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad²¹.

²⁰ Víctor Cubas Villanueva; EL PROCESO PENAL; Palestra Editores; Lima-2006;p 41

²¹ Constitución Política del Perú artículo 2, inciso 24 apartado “e”

- LA CELERIDAD PROCESAL.

La Celeridad procesal a decir de SANCHEZ VELARDE aparece como un principio dirigido a la actividad procesal, sea del órgano jurisdiccional como del órgano fiscal, a fin de que las diligencias judiciales se realicen con la prontitud debida, dejando de lado cualquier posibilidad que implique demora en el desarrollo y continuidad del procedimiento. Desde la perspectiva del justiciable o de las partes en general, puede invocarse el mismo principio aún cuando es posible su exigencia a título de derecho, del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas²²

La celeridad procesal es un elemento importantísimo relacionado a la economía procesal que debe estar presente en todo modelo procesal al amparo de la frase del gran filósofo SENECA **“Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”**.

Por otro lado, la celeridad es causa del descongestionamiento de la carga procesal; porque en la medida en que los operadores judiciales resuelven los procesos de su despacho con prontitud, dejan de verse apilados con expedientes acumulados.

2.2. EL MODELO MIXTO.

Implica la presencia de los dos sistemas anteriormente mencionados: inquisitivo y acusatorio. Como dice Raúl PEÑA CABRERA respecto del proceso ordinario y haciendo notar los rasgos inquisitivos: el procedimiento varía en las dos etapas del proceso: durante la investigación o instrucción, es escrita, reservada y con serias restricciones al ejercicio del derecho de defensa; durante el juicio, el procedimiento es oral, público, contradictorio y continuo; esta última característica es inspiración del sistema acusatorio. De esta manera hace notar que no tenemos un proceso penal con un sistema puro sino

²² SANCHEZ VELARDE Pablo; MANUAL DE DERECHO PROCESAL PENAL. IDEMSA, Lima, 2004, pp. 286-287.

que tenemos un proceso penal de corte acusatorio o inquisitivo según la mayor injerencia que tenga el modelo en el proceso penal.

MAIER al ser citado por CUBAS VILLANUEVA expresa las siguientes características del sistema mixto:

- La instrucción o investigación judicial es escrita y secreta.
- Se faculta la encarcelación preventiva como forma de segregación del imputado.
- La defensa del imputado está restringida.
- La dirección de la investigación está a cargo del juez instructor, con mayor o menor subordinación a los requerimientos del Ministerio Público.
- Decisión secreta, o sin defensa o sólo con defensa escrita, acerca de la remisión del imputado a juicio o sobre su encarcelación provisional.

Al término de este primer periodo, el proceso pasa a su segunda etapa, juicio o juzgamiento desarrollado con las características del sistema acusatorio:

- El Ministerio Público presenta un libelo en que formula la acusación contra el reo, que así pasa de la condición de imputado a la de acusado.
- En el juicio se desarrolla la actividad probatoria en presencia del acusado y su defensor que indefectiblemente debe asistirlo.
- La parte central del proceso es la Audiencia en la que se da el **contradictorio** entre los argumentos de la acusación y de la defensa.
- La audiencia se desarrolla bajo los principios de publicidad y oralidad.
- Se da comunicación libre de todos los actos de la indagatoria, al procesado y a su defensor.
- Los actos procesales deben efectuarse sin interrupción.

- Se aplica el *in dubio pro reo*, para que el Estado sea el que tenga la carga de la prueba, mientras tanto el imputado mantiene su estatus de *no culpable*.
- El fallo del tribunal del juicio es recurrible, aunque esto está bastante limitado²³.

Respecto del sistema procesal penal mixto podemos citar también a Roxin cuando expresa en relación a Alemania que, el proceso penal alemán, cuya estructura básica predomina en el continente europeo y que está influenciado de diversas maneras, principalmente por el Derecho francés (...) combina principios del sistema inquisitivo con los del procedimiento acusatorio. Coincide con el procedimiento acusatorio puro en que las actividades de persecución penal y de juzgamiento están repartidas en dos autoridades independientes (fiscal y tribunal), en que el tribunal que conoce se mantiene apartado de todas las actividades de investigación en el procedimiento preparatorio y en que la apertura de la cognición jurisdiccional está condicionada al ejercicio de la acción (...) Sin embargo, conserva rasgos del sistema inquisitivo, p. ej., cuando después de la interposición de la acción pública el señorío del procedimiento pasa al juez, él- ya sea en el procedimiento intermedio o en el debate – no sólo realiza los interrogatorios, sino que produce bajo su propia responsabilidad todas las pruebas que sirven para la declaración de culpabilidad o para descargo del imputado²⁴.

2.3 ENFOQUE DE LA PROBLEMÁTICA:

De lo expuesto colegimos que los principales problemas del proceso penal son: la fragmentación de la legislación procesal penal, la falta de articulación de nuestro ordenamiento jurídico penal, la sobrecarga procesal y la dilación de los procesos. Con el fin de luchar contra los dos últimos se creó el Ministerio Público y se otorgaron facultades discrecionales a los fiscales para la aplicación del archivo provisional, archivo definitivo y Principio de Oportunidad, es decir la facultad de desestimar denuncias, con lo que se

²³ Víctor CUBAS VILLANUEVA; EL PROCESO PENAL; Palestra Editores; 6ta edición; p.93 y 94.

²⁴ Roxin citado por CHOCANO NUÑEZ en el XVIII CONGRESO PANAMERICANO DE DERECHO PROCESAL.

introduce las salidas alternativas que traen consigo la aplicación de acuerdos reparatorios y medidas de celeridad procesal. También se dicta en el año 1995 la Ley de Terminación Anticipada aplicable solamente para algunos delitos con el único fin de acelerar los procesos.

Surge la pregunta acerca de porqué, a pesar de todos los esfuerzos realizados para erradicar la dilación de los procesos y la sobrecarga procesal, no se ha logrado el objetivo. Deducimos que la razón es la siguiente:

- FALTA DE UNIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO PENAL:

La existencia de un código de procedimientos penales del año 1940 que plantea un sistema procesal penal mixto con preponderancia inquisitiva y un código procesal penal del año 1991 que plantea un sistema procesal penal acusatorio así como un sin número de normas complementarias para el desarrollo del proceso penal son clara muestra del desmembramiento de nuestro sistema. Lo correcto es la acumulación -de las partes- en un solo cuerpo normativo. Unificar nuestra normativa procesal penal constituye un medio necesario para lograr la ansiada reforma; esto con el único objetivo de que la totalidad del proceso penal se desarrolle al amparo de un sistema acorde con la Constitución, la modernidad y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Perú – que tienen rango de Ley. Nuestro ordenamiento debe ser respetuoso de la Constitución Política del Perú y concordante con ella. Nuestros códigos no deben ser cronológicamente anteriores a la Constitución y por tanto vulnerar derechos y garantías básicas como el debido proceso y la presunción de inocencia entre otros. La normativa procesal penal discordante con la Constitución no presenta cualidades acusatorias del proceso como la celeridad, publicidad y el contradictorio entre otros.

3. FUNDAMENTOS PARA LA REFORMA:

Sintetizando diremos que la fragmentación de la legislación procesal penal ocurrida en las últimas dos décadas trae consigo la necesidad insoslayable de organizar toda la normativa en un cuerpo único y sistemático; pero sobre todo **bajo la lógica de un mismo modelo de persecución penal: EL SISTEMA ACUSATORIO** cuyas características detallamos con anterioridad.

Urge, por tanto, un cambio que refleje el respeto a los derechos fundamentales en **un solo cuerpo normativo** que deje de lado la aplicación del sistema inquisitivo privilegiando por el contrario las prácticas de un modelo acusatorio **acorde con la Constitución** y al amparo de un **único sistema: el acusatorio** lo que implica una reforma que se concreta de alguna manera con el código procesal penal de 2004.

Decimos: **de alguna manera** la reforma se ve concretada, porque **stricto sensu** la reforma, más que hacer o implementar un nuevo código, implica un cambio en la manera de pensar y más aun en la manera de actuar por parte de los operadores del derecho: Jueces, abogados, fiscales, y además de los justiciables y de la sociedad en su conjunto porque se necesita la ayuda incluso de la prensa para dejar de ver en el proceso un medio para satisfacer venganzas y que por el contrario vean en él un mecanismo de solución de conflicto con celeridad, privilegiando las salidas alternativas, y respetando los derechos fundamentales de la persona humana.

Surge ante esta problemática, no solamente del Perú, sino en Latinoamérica, una corriente que impulsaba la modernización de los códigos en el ámbito procesal penal y producto de ello se lograron reformas en países como Argentina, Paraguay, Chile, Bolivia, Venezuela, Colombia, Costa Rica, Honduras, El Salvador y Ecuador. Esta tendencia en la legislación comparada tiene su razón de ser en la necesidad de que los países de este lado del continente adecuen su legislación a los estándares mínimos que establecen los Tratados Internacionales de Derechos Humanos (Declaración Universal de los

Derechos Humanos, Convención Americana de Derechos Humanos y Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos)²⁵. El Perú ha sido parte de este movimiento de reforma del cual surge la necesidad de contar con un solo código (erradicando de esta manera el desmembramiento de la normativa procesal penal), acorde con la Constitución y Los Tratados Internacionales y sobretodo bajo la lógica de un solo modelo procesal penal: el acusatorio; esto es, del código procesal penal de 2004.

4. EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL.

Luego de la entrada en vigencia de la Constitución de 1993, se publicó el Proyecto del Código Procesal Penal de 1995, el mismo que después de ser discutido en el Congreso de la República fue aprobado pero fue observado por el Ejecutivo en octubre de 1997 y posteriormente dejado al olvido. Ya en el año 2003 el Ejecutivo impulsa la creación de una Comisión de Alto Nivel mediante Decreto Supremo N° 005-2003-JUS del 14 de marzo de 2003, para que propongan las modificaciones y mecanismos legales para la aprobación del Nuevo Código Procesal Penal.

Así, el 28 de julio de 2004 se promulgó mediante Decreto Legislativo N° 957 el esperado NCPP, que mostraba una inequívoca orientación acusatoria y desplazaba definitivamente las características inquisitoriales contenidas en el código de procedimientos penales de 1940²⁶.

Surge de esta manera el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) con el objetivo de tratar de luchar contra la sobrecarga procesal, el hacinamiento, la inconstitucionalidad del proceso sumario, el desmembramiento de la normativa procesal penal, el sistema inquisitivo, la dilación de los procesos, la falta de publicidad, intermediación, la escrituralidad y todo aquello que implique la vulneración del contenido esencial de los derechos fundamentales.

²⁵ CÓDIGO PROCESAL PENAL DEL 2004; Exposición de motivos; Editorial GRIJLEY; pag. 334

²⁶ LA APLICACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL EN HUAURA. Una experiencia positiva; Justicia Viva; 2008; pag. 16.

El NCPP tiene una exposición de motivos y consta de un título preliminar con diez artículos en los que plasma su concordancia con la Constitución; al respecto es importante destacar su artículo X del Título Preliminar en el que expresa que las normas que integran el Título Preliminar prevalecen sobre cualquier otra disposición del mismo Código y continúa diciendo que serán utilizadas como fundamento de interpretación; cuestión importantísima porque significa que las normas que integran este Título son derivadas de la Constitución al amparo de que una norma sólo puede ser dejada de lado por otra de mayor jerarquía. Esto es muestra de la concreción de la unificación normativa procesal penal y muestra de la concordancia importantísima entre la Ley de Leyes y nuestro código (ahora en Huaura NCPP) que desde hace buen tiempo acariciaban los hombres de formación jurídica y más aun la sociedad en su conjunto al amparo de que la función jurisdiccional es la más importante de las funciones que integran el Poder del Estado²⁷ en tanto que es la encargada de controlar las otras dos funciones: Ejecutiva y Legislativa.

4.1. LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL.

El Código Procesal Penal de 2004 fue creado por Decreto Legislativo 957 y mediante Decreto Legislativo N° 958 del 28 de julio de 2004 se creó la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal como el ente encargado de diseñar, conducir, coordinar, supervisar y evaluar el proceso de implementación del mencionado código además de hacer la Propuesta de Implementación del NCPP. Esta Comisión de Alto Nivel está conformada por representantes del Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio del Interior, Policía Nacional del Perú, Ministerio de Economía y Finanzas y quien la preside: el Ministerio de Justicia.

Las atribuciones de la comisión, al amparo del artículo 4 del Decreto Legislativo 958 eran: a) formular las políticas y objetivos para la adecuada implementación progresiva del NCPP; b) diseñar la propuesta específica del

²⁷ La función ejecutiva, la función legislativa y la función judicial conforman un único Poder del Estado. En tal sentido no se trata de una división de poderes sino de una división de funciones.

plan de implementación y c) elaborar el calendario oficial de la aplicación del NCPP²⁸. Así, tras la necesaria coordinación entre ellos y aun dejando de lado sus limitaciones sobre todo económica; pero en pro de la anhelada reforma llegaron a la conclusión de que era necesario un cambio gradual, y al amparo de lo ya experimentado en otros países de América Latina concluyeron en la aplicación progresiva del NCPP que iniciaría en el distrito judicial de Huaura.

La pregunta lógica sería por qué razón se decidió que la **progresiva implementación**²⁹ se iniciara en el distrito judicial de Huaura. Las respuestas posiblemente las encontramos en los siguientes puntos:

- **La proximidad al distrito judicial de Lima.** Porque al tratarse de un plan piloto se requiere de un fácil monitoreo que se ve facilitado por la proximidad entre los distrito judiciales de Huaura y el de Lima; es decir, que por encontrarse territorialmente cerca de Lima, los resultados de la aplicación del código procesal penal de 2004 en el DJ de Huara son fácilmente analizados al amparo del poco tiempo que implica la distancia entre ambos distritos judiciales.
- **Las dimensiones territoriales.** El D.J. de Huaura facilita el desarrollo del nuevo modelo planteado por el código procesal penal de 2004 en tanto que no cuenta con gran extensión territorial siendo adecuado para realizar una suerte experimento controlado. Eso es, que cuenta con una adecuada extensión territorial; no muy grande, de manera tal que permite el análisis de este plan piloto.
- **La carga procesal.** Se requería que la carga penal fuera representativa del tipo de casos que procesan la mayoría de distritos judiciales, vale decir, que se traten de delitos que son cometidos en su mayoría en todos los distritos judiciales y en atención a los dos puntos anteriormente expuestos, el DJ de Huaura reúne estos requisitos.

²⁸ LA APLICACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL EN HUAURA. Una experiencia positiva; Justicia Viva; 2008; pag. 16

²⁹ Artículo 4 del Decreto Legislativo 958.

Luego de un sin número de retrasos y sin la capacitación ni los medios materiales necesarios para la aplicación del nuevo modelo procesal penal, llegó el 1 de julio del año 2006 en que comenzó su progresiva implementación propugnando las prácticas acusatorias de un modelo que se regía por el desarrollo de un proceso penal con publicidad, celeridad, en el que se privilegia el contradictorio y el respeto a los derechos fundamentales de la persona humana.

4.2. EL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE 2004:

El Código Procesal Penal de 2004 o nuevo Código Procesal Penal consta de 566 artículos aunque, de la totalidad de su estructura solamente, para efectos de la realización de la presente Tesis, nos ocupamos del Proceso de Terminación Anticipada y del Principio de oportunidad, delimitando nuestro campo de estudio territorial al distrito judicial de Huaura sin dejar de hacer mención de algunos puntos importantes a fin de lograr un mayor y mejor entendimiento de las reflexiones respecto del presente trabajo de investigación (Tesis).

En concordancia con lo expuesto en el párrafo anterior y teniendo en cuenta la importancia de los cambios ocasionados en las distintas instituciones que involucra la implementación del NCPP así como de las facultades de que dota a las mismas y los problemas que acarrea exponemos a continuación los ámbitos de la reforma.

5. ROL DE LOS OPERADORES EN EL NUEVO MODELO:

- GENERALIDADES.

Indiscutiblemente la reforma que trae consigo la aplicación del NCPP ocasiona una serie de modificaciones en los roles que cumplen los operadores del nuevo proceso penal, esto es, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional, la defensoría de oficio y la defensa privada al amparo de

enfrentarse a una nueva manera de pensar y por tanto de desarrollar el proceso penal.

Es importante destacar que para la implementación del NCPP se ha logrado que las instituciones antes mencionadas logren un trabajo conjunto; esto es, se ha realizado un trabajo de **coordinación** que nunca antes se había logrado en tal magnitud, un trabajo de coordinación que ha servido para delimitar las facultades que cada institución tiene a fin de lograr una correcta administración de justicia, sin dilaciones indebidas sino que por el contrario favorezcan un proceso con las garantías procesales adecuadas para tutelar los derechos de los justiciables. Este trabajo de coordinación también ha permitido que las instituciones en mención trabajen en base a un lenguaje común, el lenguaje del Nuevo Código Procesal Penal³⁰, es decir, el lenguaje del modelo procesal penal **ACUSATORIO GARANTISTA**.

5.1. RESPECTO DE LO JURISDICCIONAL.

- CAMBIOS EN LA MANERA DE PENSAR.

De la observación del desarrollo del proceso penal en el distrito judicial de Huaura y más aun de las audiencias³¹ expresamos que:

Los jueces del distrito judicial de Huaura, entendiendo los pilares del nuevo proceso penal plasmados en el código procesal penal del 2004, al igual que los fiscales y los abogados defensores favorecen la celeridad del proceso mediante las salidas alternativas³². Se trata de lograr un resultado que

³⁰ El Código Procesal Penal del 2004 trae consigo un nuevo lenguaje en tanto se exige un cambio de mentalidad dejando de lado las prácticas inquisitivas además de introducir una serie de términos técnicos.

³¹ Las audiencias del Distrito Judicial de Huaura en aplicación del nuevo proceso penal se desarrollan bajo dos principios fundamentales: **La Publicidad y la Oralidad**

³² La mayoría de las denuncias que ingresan a la fiscalía del distrito judicial de Huaura a la actualidad son archivadas y las que siguen son terminadas mediante el Principio de Oportunidad y la Terminación Anticipada; salidas alternativas del proceso penal que han dado gran resultado convirtiéndose en la regla de manera tan que solamente llegue a juicio oral lo que realmente debe llegar. Esto es una especie de cernidor o purificar que conlleva al descongestionamiento de la carga procesal.

satisfaga al agraviado en particular y a la sociedad en general sin apartarse de los lineamientos del derecho y desechando la **vendetta**.

Pero el aspecto más importante es el referido al hecho de la **separación de funciones** en tanto que entienden que su papel es el de juzgar, no el de calificar el delito o acusar. La policía realiza las investigaciones bajo la dirección técnica del fiscal, el fiscal es quien acusa y el juez es quien juzga. He aquí la esencia del modelo adversarial. Los jueces ahora son³³ terceros pasivos, esto es, que tienen bien diferenciada su función de juzgar; su función no es acusar o defender al procesado sino juzgar. La idea es que el juez - sea unipersonal o colegiado – llegue a la audiencia, **limpio**, sin conocer del proceso para evitar de esta manera la parcialización³⁴ y desde luego, que no asuma posturas que corresponda a alguna de las partes.

Otro cambio importante en el rol de la función jurisdiccional es el referente al método de trabajo de los jueces en tanto que se ha dejado de privilegiar la confesión como “**regina probatio**” para dar prioridad a la prueba pericial en tanto que es muestra del desarrollo de la ciencia y la tecnología. Esto constituye claramente una gran ventaja en la búsqueda de la verdad para mejor sentenciar.

- CAMBIOS MATERIALES.

Evidentemente una reforma tan importante como la que trae consigo la implementación del NCPP implica una preparación, tener un mayor conocimiento y un mejor manejo de las herramientas que proporciona el NCPP lo que obliga a la capacitación; pero también es importante que se brinden los medios materiales necesarios para llevar a la práctica, la teoría. Nos referimos

³³ De la observación se desprende que en el distrito judicial de Huaura existen algunos jueces que consiente o inconscientemente continúan con las prácticas inquisitorias; por ejemplo cuando el juez al amparo de la norma adjetiva realiza preguntas al procesado siendo que solamente puede hacerlo en caso excepcional cuando quede alguna duda y necesite formarse convicción; en este caso el juez asume la postura del fiscal. Pero este ejemplo responde a un caso excepcional porque la aplicación del nuevo código y mas aun el espíritu que encierra ha calado en la gran mayoría de los administradores de justicia y ha logrado muy buenos resultados en el D.J. de Huaura.

³⁴ En nuestro medio lamentablemente los medios de comunicación no coadyuvan a esto en tanto que al aparecer una noticia que llama la atención de la prensa, la difunden hasta no más poder; lo que dificulta que el juez llegue a la audiencia sin conocer del proceso.

concisamente, al incremento en el número de jueces. Al respecto el siguiente cuadro N° 1 nos ilustra.

CUADRO 1. Número de jueces por número de habitantes. Junio del 2007

(Población proyectada al 2007 del Distrito Judicial de Huaura, según la tasa de crecimiento intercensal)

Provincias	N° de magistrados después de la entrada en vigencia del NCPP	N° de habitantes	De habitantes por juez
Huaura	28	205.561	7.341
Huaral	12	171.594	14.300
Barranca	11	144.495	13.136
Oyón	3	18.281	6.094
Cajatambo	2	10.489	5.245
Total	56	550.420	9.829

Fuente: INEI. X Censo de población y V de vivienda del 2005

Elaboración: Área de la Presidencia de la **CSJHA**³⁵

Según se muestra en el cuadro N° 1, se ha pasado de 12.465 habitantes por juez a 9.829 habitantes por juez; lo que implica que al aumentar la cantidad de jueces por habitantes se logrará el descongestionamiento de la carga procesal y ello se manifestará en celeridad y por tanto en mejor desarrollo del proceso penal.

Por otro lado en el Distrito Judicial de Huaura, para la aplicación del nuevo modelo procesal penal, los jueces penales han contado con un personal de apoyo (jurisdiccional o administrativo) compuesto por 63 personas, 19 más que cuando regía el código de procedimientos penales de 1940; lo que al igual

³⁵ La aplicación del Nuevo Código Procesal Penal en Huaura, Una Experiencia Positiva; Justicia Viva. 2008.

que en el primer caso facilita la labor del juez y esta se ve reflejada en una correcta y pronta administración de justicia.

Ahora bien, a pesar de lo anteriormente mencionado, no todo ha sido color de rosa sino que existen aspectos malos como el hecho de que a la entrada en vigencia del NCPP, los jueces no contaban con la debida capacitación, cuestión que está siendo suplida por la experiencia adquirida desde que se inició la progresiva implementación del NCPP.

Si bien es cierto que los jueces cuentan con una serie de carencias esta han sido supliendo con creatividad por ejemplo respecto de la **competencia supraprovincial** por la cual se ha establecido la lógica: en las provincias en las que se ha decidido no crear ningún de los órgano jurisdiccional que se requiere para llevar a cabo diferentes etapas previstas en el NCPP, se dispone que un órgano jurisdiccional, de otra provincia, tenga competencia³⁶. (Por Resolución Administrativa 078-2006-CE-PJ se dispuso que la Sala Penal y los juzgados colegiados con sede en Huaura tengan función jurisdiccional supraprovincial en las cinco provincias, ya que en las otras provincias no existen ni sala penal ni juzgados colegiados...)

Otro punto importante de la reforma que implica la aplicación del NCPP respecto de lo jurisdiccional es la **organización corporativa** que implica que los órganos jurisdiccionales comparten al personal de apoyo, sin que cada uno tenga su propio personal, de manera tal que se contribuye con la transparencia y se desecha la corrupción.

También se ha realizado la adecuación que el NCPP exigía en la estructura y organigrama del Poder Judicial y se ha logrado mejorar la capacidad operativa (infraestructura y equipos) además de adecuar los ambientes para cumplir con las exigencias que plantea el NCPP.

Sin embargo los logros realizados no son suficientes y de lo que se trata es que se siga aumentando la cantidad de jueces, personal de apoyo; que haya

³⁶ Bis.p.43

mejoras en la infraestructura de los ambientes y de los equipos y que siga una continua e incesante preparación para obtener el conocimiento y habilidades necesarias para lograr el desarrollo del proceso penal que devuelva la confianza en las instituciones de justicia penal, los operadores del derecho, la democracia y el estado de derecho.

5.2. RESPECTO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

-CAMBIO EN LA MANERA DE PENSAR.

A manera de introducción podemos decir que los representantes del Ministerio Público al igual que los jueces, secretarios, abogados y policías del distrito judicial de Huaura se convirtieron en una especie de conejillo de indias tras la aplicación de un nuevo modelo procesal penal, porque llegado el día de la entrada en vigencia del nuevo código, el 1º de julio del año 2006³⁷, se enfrentaron al problema de no tener referente alguno, de manera tal, que no sabían con exactitud como afrontar el nuevo modelo procesal; sin embargo, a tres años de aplicarse el NCPP, Huaura es un modelo a seguir en la progresiva entrada en vigencia del NCPP en los distintos distritos judiciales del Perú así como un referente obligatorio para el correcto desarrollo del nuevo proceso penal.

Sin lugar a duda el Ministerio Público es quien ha sufrido el mayor cambio en tanto que como persecutor del delito ha cambiado la idea de llevar toda denuncia a juicio oral (política de dejar hacer, dejar pasar) para privilegiar la práctica de las salidas alternativas como la terminación anticipada, y el principio de oportunidad. De lo que se trata es de hacer un filtro para que sólo llegue a juicio oral lo que realmente debe llegar.

El fiscal del distrito judicial de Huaura es consciente de su papel protagónico en el proceso penal. El es quien dirige la investigación desde su inicio. Al respecto diremos que la dirección del Fiscal es particularmente

³⁷ La primera fecha para la entrada en vigencia del NCPP era el 01 de febrero de 2006 y tan solo dos días antes, mediante Ley 28671 se postergar para el 01 de julio de 2006.

presencial; pero la más de las veces es jurídica en tanto que, a decir de José María Asencio Mellado, es imposible que hayan tantos fiscales como policías y por tanto la policía debe hacer el trabajo de campo bajo la dirección del fiscal que como ya dijimos es una dirección legal o jurídica³⁸.

Aspecto importante de destacar es también el hecho de que ahora se mide el rendimiento del Ministerio Público de Huacho respecto de su productividad; esto se refiere a que la productividad del fiscal debía implicar en un inicio, por lo menos quince procesos terminados mensualmente entendiendo por **“terminados”** hasta el pago completo de la reparación.

Así también, el nuevo modelo procesal penal trae consigo herramientas que el fiscal puede utilizar en tanto que ahora trata de depurar lo que debe llegar a juicio (casos complejos). Estas herramientas son: el Principio de Oportunidad y la Terminación Anticipada entre otras.

Importante es mencionar también que los fiscales privilegian las pruebas periciales en tanto que el avance de ciencia y la tecnología deja un muy pequeño trecho al error.

- CAMBIOS MATERIALES.

La aplicación del NCPP en el distrito judicial de Huaura implicó al igual que respecto de los jueces, un aumento en el número de fiscales. Los siguientes cuadros nos ilustran al respecto.

³⁸ Conferencia de Asencio Mellado en el diplomado organizado por el INPECCP, sobre la aplicación del CPP.

CUADRO N° 2. PERSONAL FISCAL (PENAL) DEL DISTRITO JUDICIAL DE HUAURA ANTES DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL NCPP³⁹.

	Huaura	Huaral	Barranca	Cajatambo	Oyón	Total
Fiscal Superior	2	0	0	0	0	2
Fiscal adjunto superior	2	0	0	0	0	2
Fiscal provincial	3	3	2	1	1	10
Fiscal adjunto provincial	3	3	2	1	1	10
Total	10	6	4	2	2	24

CUADRO N° 2. PERSONAL FISCAL (PENAL) DEL DISTRITO JUDICIAL DE HUAURA DESPUES DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL NCPP⁴⁰.

	Huaura	Huaral	Barranca	Cajatambo	Oyón	Total
Fiscal Superior	2	0	0	0	0	2
Fiscal adjunto superior	2	0	0	0	0	2
Fiscal provincial	7	6	6	1	1	21
Fiscal adjunto provincial	12	12	12	3	3	42
Total	23	18	18	4	4	67

Como se desprende de los gráficos anteriores, el incremento en el número de fiscales dedicados a aplicar el NCPP ha sido mayor que en el caso de los jueces (de 24 a 67). Pero la reforma abarca más. También se ha incrementado el personal de apoyo de 22 a 93 personas, se ha producido también una adecuación en la estructura u organigrama, de acuerdo con lo dispuesto por el NCPP. Así por ejemplo se han creado las fiscalías penales corporativas y las fiscalías para liquidar y adecuar denuncias recibidas anteriormente a la entrada en vigencia del NCPP. También se ha separado a los fiscales dedicados a investigar de los especializados en aplicar el proceso de decisiones tempranas.

³⁹ La aplicación del Nuevo Código Procesal Penal en Huaura, Una Experiencia Positiva; Justicia Viva. 2008.p.56

⁴⁰ La aplicación del Nuevo Código Procesal Penal en Huaura, Una Experiencia Positiva; Justicia Viva. 2008.p.56

La fiscalía del distrito judicial de Huaura ha sido la institución que más se ha preocupado por capacitarse y dotarse de los medios necesarios para la correcta aplicación del NCPP. Ha logrado de esta manera la implementación del departamento de medicina legal y el departamento de protección a víctimas y testigos implicando que aún con sus deficientes recursos económicos han demostrado que tienen muy presente su papel protagónico en el desarrollo del nuevo proceso penal; Al respecto es importante destacar que el Ministerio Público *dejó de ser el “espejo” de la organización judicial. Esta nueva organización unida a las instituciones que ofrece el NCPP , está permitiendo que el trabajo fiscal se transforme de eminentemente dictaminador, inquisitivo, acusador, punitivo, a un trabajo activo, de campo, en búsqueda de los elementos que permitan-de preferencia- una solución rápida del conflicto o en su defecto, el sostenimiento consistente de una acusación en juicio*⁴¹.

5.3. RESPECTO DE LO POLICIAL.

- CAMBIO EN LA MANERA DE PENSAR.

La policía es la institución que menos preparación y menos recursos ha tenido para la implementación del nuevo modelo, sin embargo, gracias a la dirección de la investigación por el fiscal y al continuo diálogo con el mismo, se ha logrado que coadyuven al correcto desarrollo de un proceso al amparo del espíritu del NCPP. Por lo menos en el D.J. de Huaura la policía se encuentra en continua comunicación con los fiscales⁴²; es decir, tiene el continuo asesoramiento de la fiscalía y por tanto tiene muy presente que **“su función no es la de calificar”**⁴³ sino la de realizar las investigaciones necesarias para que el fiscal reúna las pruebas para sostener su acusación. Entienden que quien califica el delito es la fiscalía y no la policía y por tanto han logrado una comunicación interinstitucional con la policía de manera tal que facilitan el desarrollo del nuevo proceso penal.

⁴¹ Informe de los primeros cien días de la implementación del nuevo código procesal penal en el distrito judicial de Huaura. Supervisado por el doctor Félix Ernesto Salazar Huapalla, Ex Fiscal Superior Decano.

⁴² La fácil comunicación entre la policía y la fiscalía en el distrito judicial de Huaura es resultado de que se trate de ciudades pequeñas.

⁴³ Entiéndase por calificar, la tipificación de un delito.

- CAMBIOS MATERIALES.

El número de efectivos policiales se mantiene básicamente igual en las distintas provincias del Distrito Judicial de Huaura; existen 24 comisarias en las provincias y a la entrada en vigencia del NCPP el número de efectivos disminuyó de 845 a 843.

No cuentan con ambiente apropiado y acondicionado para sala de retención, interrogatorio, reconocimiento en rueda ni tampoco cuentan con implementos necesarios para la realización de las investigaciones. Tampoco se ha producido algún cambio organizacional.

5.4. RESPECTO DE LA DEFENSORÍA DE OFICIO.

- CAMBIO EN LA MANERA DE PENSAR.

La defensa de oficio al igual que la particular y los otros operadores intervinientes en el proceso penal han entendido la nueva lógica que el modelo acusatorio plasmado en el NCPP desarrolla; es decir, buscan la culminación del proceso mediante las salidas alternativas de conclusión del proceso como la aplicación del Principio de Oportunidad y la Terminación Anticipada.

Como venimos repitiendo, de lo que se trata es de que llegue a juicio oral la minoría de casos que tienen relevancia y complejidad desechando en el camino, como por una suerte de filtro, los casos de mediana o poca complejidad.

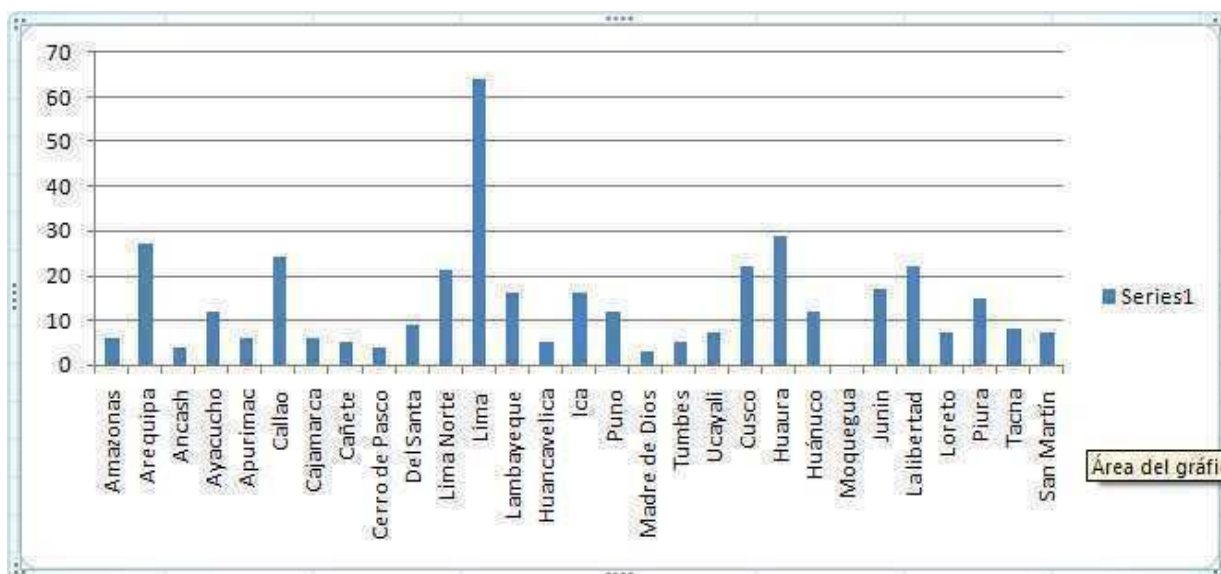
- CAMBIOS MATERIALES.

El Ministerio de Justicia ha contribuido al buen desarrollo del nuevo modelo procesal penal en tanto que ha aumentado la cantidad de abogados de oficio aunque no en la cantidad que lo ha hecho el Ministerio Público. Los defensores de oficio del D.J. de Huaura han aumentado de 7 a 29 lo que

convierte a Huaura en el segundo con mayor cantidad de defensores de oficio en todo el país. Véase al respecto el siguiente cuadro.

De igual forma se ha preocupado por una buena preparación que se ve reflejada en la actuación de los abogados de oficio en el desarrollo del proceso penal e inclusive desde la detención; pero sobretodo se hace notar en el juicio oral donde se necesita de rapidez mental, óptimos conocimientos y buena preparación respecto del conocimiento y la litigación oral; esto teniendo en cuenta la naturaleza misma del juicio oral (público, oral y contradictorio).

DEFENSORES EN MATERIA PENAL POR DISTRITO JUDICIAL



Cuadro modificado de anexos de “La aplicación del Nuevo Código Procesal Penal en Huaura. Una experiencia positiva”⁴⁴

*Respecto del distrito judicial de Moquegua no figura la información.

Continuando el tema de los ámbitos de la reforma que implica la aplicación del NCPP diremos que también se ha evidenciado una mejor y mayor preparación de la defensa privada pero sin alcanzar el nivel de la

⁴⁴ La aplicación del Nuevo Código Procesal Penal en Huaura. Una experiencia positiva. Justicia Viva. p.261

defensa de oficio. En el D.J. de Huaura son los abogados de oficio los que cuentan con una mejor preparación producto del impulso por parte del Ministerio de Justicia y la propia voluntad.

6. APLICACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL EN EL DISTRITO JUDICIAL DE HUAURA.

Como hemos tratado líneas antes, el distrito judicial de Huaura comienza la progresiva implementación del NCPP como una suerte de conejillo de indias en tanto que a la entrada en vigencia del NCPP, los operadores del proceso penal no sabían a ciencia cierta, cómo se debía desarrollar el nuevo proceso penal. Es obvio que no existía precedente alguno; sin embargo estas deficiencias se han ido supliendo con la “práctica” que ha convertido a los operadores del proceso penal del distrito judicial de Huaura en verdaderos abanderados de un modelo procesal acusatorio.

- HUAURA:

Está conformado por las provincias de Oyón, Cajatambo, Barranca, Huaral y Huaura como se muestra en el siguiente cuadro:

PROVINCIAS QUE CONSTITUYEN EL DISTRITO JUDICIAL DE HUAURA



En el distrito judicial de Huaura existe 40 distritos políticos; está ubicado al norte del departamento de Lima, tiene una extensión territorial de 13,305 Km², cuenta con una población de 489,672 y su densidad poblacional se calcula en 37 habitantes por kilómetro cuadrado.

Al momento de la aplicación del NCPP no se hacía notar todavía si se estaba actuando correctamente porque recién se iba a **actuar**; se necesitaba por tanto que se produzca el desarrollo del tiempo para poder decir si el modelo planteado por el NCPP estaba siendo aplicado correctamente o por el contrario se seguían realizando las antiguas prácticas inquisitivas y por tanto se trataba solamente de un cambio de código y no de una reforma.

Esta entrada en vigencia del NCPP supone para algunos, la concreción de una reforma procesal penal que se hacía necesaria; sin embargo, en estricto, la aplicación del NCPP no es LA CONCRECIÓN DE LA REFORMA, porque aún nada había cambiado, porque se verían los frutos de los esfuerzos desplegados por parte de los operadores judiciales en el transcurso del tiempo y en el desarrollo de su trabajo. En otras palabras, la implementación en sí no es mas que el comienzo de la reforma en tanto que, la reforma que trae consigo la aplicación del NCPP implica un cambio en la manera de pensar y de actuar, de manera tal que se privilegien por ejemplo los mecanismos de celeridad procesal como la terminación anticipada, proceso inmediato y principio de oportunidad. De lo que se trata es de ir descongestionando la cantidad de denuncias para que solamente lleguen al poder judicial, y aún más, sólo lleguen a juicio oral, los casos que exijan un mayor análisis al amparo de su complejidad.

En esencia lo que implica la reforma del proceso penal en el Perú no es la implementación de un código sino que se trata de un cambio de mentalidades, se trata de trabajar con gente que no esté contaminada con las prácticas inquisitivas, gente que esté dispuesta al cambio y abierta a entender que lo que se busca en el proceso penal no es la venganza (porque por ejemplo, muchas veces, la víctima o los familiares de la víctima piden que el presunto actor del delito sea encerrado y que reciba su castigo) sino la

solución apropiada de la *litis* con sujeción a un debido proceso y con respeto a las garantías que demanda el modelo procesal penal acusatorio garantista.

De alguna manera, de lo que se trata es de resetear el disco (como decía la fallecida ex Fiscal de la Nación: doctora Adelaida Bolívar), **cambiar la manera de pensar y de actuar** de los Jueces, de los Abogados, de los Fiscales, de los medios de comunicación y de la sociedad en su conjunto que deben entender que un país es más moderno cuando en su administración de justicia se deja de lado la venganza, privilegiando el diálogo alturado y derivando en un tercero llamado juez, la solución de su conflicto.

Como dice Alberto M. Binder, la reforma de la justicia penal debe ser vista como un cambio de prácticas. Actualmente lo que llamamos “justicia penal” es un conjunto de prácticas (no siempre apegadas al código) que se sustentan en la fuerza de la rutina, la adhesión de los operadores y las funciones reales que cumplen. El nuevo sistema de justicia penal también será un conjunto de prácticas⁴⁵.

Al respecto es importante hacer notar que en Chile por ejemplo lo que se planteaba era que la reforma en el proceso penal era en puridad una reforma cultural.

6.1. PROBLEMÁTICA DEL DISTRITO JUDICIAL DE HUAURA A LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL NCPP:

A la entrada en vigencia del NCPP se suscitaron una serie de circunstancias insoslayables al amparo de que, un cambio, cualquiera que fuere, no se da, de manera pacífica o sin que nadie note la diferencia sino que genera por el contrario un freno por parte de un sector que está acostumbrado a las prácticas inquisitivas que realizan; además existe también el rechazo de otros sectores porque están en juego intereses.

⁴⁵ Alberto M. BINDER; REFORMA DEL PROCESO PENAL EN EL PERÚ- ¿QUÉ SIGNIFICA CAMBIAR LA JUSTICIA PENAL?; Ediciones BLG; Trujillo-Perú 2005; pg

Por otro lado, los operadores judiciales actuarían sujetos al modelo acusatorio o realizarían su trabajo con las prácticas inquisitivas a las que estaban acostumbrados; lo que sucede es que las prácticas inquisitivas se desarrollan aun no queriendo realizarlas porque aquel que está acostumbrado a trabajar de determinada manera, realiza esas prácticas porque es la única manera como sabe trabajar, se aferra a las prácticas que conoce porque ante el nuevo modelo se produce una incertidumbre respecto del qué hacer, entonces se preguntan ¿cómo actúo aquí?, ¿qué hago acá?, ¿cómo resuelvo tal o cual cuestión?; preguntas connaturales al hecho de enfrentarse a un proceso penal contrario al que se conocía hasta entonces.

Cuando el NCPP entra en vigencia, en el distrito judicial de Huaura se pone en evidencia que las instituciones encargadas de la implementación del NCPP tales como el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y la Policía Nacional no tenían una planificación preexistente, lo que se plasma en un desconocimiento de las actividades que se debían realizar para actuar acorde con el modelo planteado así como también se hace clara la asignación tardía de recursos económicos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas a dichas organizaciones para la oportuna contratación y/o asignación de Jueces, Fiscales, Defensores de Oficio, Efectivos de la Policía y personal de apoyo, adicionales necesarios para el proceso de implementación; así como también para la capacitación del nuevo personal y del ya existente y la adquisición de los recursos materiales necesarios para dicho personal.⁴⁶

Lo relevante en este tema es que la incertidumbre acerca del comportamiento de los operadores del proceso penal (jueces, abogados, fiscales y policía) se vio subsanada en la práctica al dejar de lado las prácticas inquisitivas privilegiando las acusatorias al amparo del espíritu del NCPP. Estas prácticas acusatorias se ven ejemplificadas en el hecho (para efectos de la presente tesis) de que tanto fiscales, como abogados y jueces favorezcan los mecanismos de celeridad procesal, vale decir, que lo que se busca es el descongestionamiento de la carga procesal y la celeridad en los procesos

⁴⁶ INFORME DE LOS CIEN PRIMEROS DÍAS DE IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL EN EL DISTRITO JUDICIAL DE HUAURA.

dando importancia mayor a los procesos que la merezcan e importancia menor a los delitos de bagatela. La descongestión y rapidez de los procesos está íntimamente ligada al hecho de que con la aplicación del NCPP existe una mayor rigurosidad en la tipificación del delito; cuestión importante que permite desechar un número importante de denuncias que no deberían llegar siquiera a la fiscalía al amparo de la cualidad de **última ratio** del derecho penal.

Hoy en día, en el DJ de Huaura, los operadores del proceso penal dejaron de lado las prácticas del antiguo modelo para propugnar las prácticas acusatorias y por tanto lograron un proceso penal con celeridad, respetuoso de los derechos fundamentales de la persona humana y de la Constitución.

6.2. RESPECTO DE LAS DIFICULTADES MATERIALES.

A la entrada en vigencia del NCPP, las instituciones encargadas del manejo del proceso penal no contaban con recursos económicos para capacitación, equipos de audio y video y aún peor no contaban, como es el caso del Ministerio Público, con un local propio; tenían grandes deficiencias que imposibilitaban la correcta implementación. Tampoco contaban con una correcta preparación para el desarrollo del proceso penal sino que fueron aprendiendo en la **praxis**, subsanando dudas y puliendo conceptos a través de la coordinación interinstitucional a través de la cual se reunían representantes de de las instituciones antes mencionadas para ver la mejor manera de afrontar tal problemática.

Si bien estas carencias económicas han sido suplidas en gran medida, falta aún mucho por hacer. El ministerio Público del distrito judicial de Huaura por ejemplo a cargo, en ese entonces, del doctor Félix Salazar Huapalla implemento la oficina de protección a víctimas y testigos entre otras; lo que deja claro que a pesar de los problemas económicos y deficiencias institucionales, se ha trabajado en pro del espíritu del Nuevo Código Procesal Penal.

CAPÍTULO II

I. LOS PROCESOS ESPECIALES EN EL NCPP.

A lo largo del presente trabajo hemos ido comentando la importancia indiscutible de los derechos y garantías que hacen que el proceso penal sea respetuoso de los derechos humanos en concordancia con una constitución moderna, como la nuestra. Al respecto dice Peña Cabrera que la Constitución Política de 1993 diferencia claramente la potestad persecutoria de la actividad jurisdiccional. De ese modo, el representante del Ministerio Público ejercería la titularidad de la acción penal pública; en consecuencia, tiene la facultad de iniciar la investigación, dirigirla, formular acusación de ser necesaria; de su parte, el titular de la jurisdicción penal asumiría sólo la potestad que le corresponde verdaderamente; juzgar, sin perjuicio de la potestad cautelatoria que le es inherente durante la investigación⁴⁷. Y continúa diciendo que esto es lo que nos da a entender el porqué de la adopción de un modelo de corte acusatorio garantista en el Proyecto del Código Procesal Penal de 1995; lo que hoy vemos concretado en el Código Procesal Penal del 2004 que venimos llamando Nuevo Código Procesal Penal o simplemente NCPP que es a todas luces – a decir de José María Asencio Mellado- un código modelo.

Por otro lado, entendemos que el nuevo proceso penal se desarrolla en tres etapas (etapa preliminar, Etapa intermedia y juzgamiento) y que el modelo mixto se manifiesta en una primera etapa a través de la escrituralidad, siendo limitadamente público y restringidamente contradictorio mientras que durante el juicio, el procedimiento es oral, público y contradictorio⁴⁸; es decir, que el juicio oral o audiencia es una etapa procesal, organizada sobre la base de los principios de publicidad, oralidad, inmediación y contradicción y que en él existen formalidades, ritos, garantías y derechos insoslayables como el cumplimiento de los plazos, la exclusividad de la titularidad de la acción penal pública por parte del fiscal, el respeto al derecho de defensa y presunción de

⁴⁷ Raúl PEÑA CABRERA; PROCESOS PENALES ESPECIALES; Gráfico “El Tribunal” de Hogarth; 1997; p. 20.

⁴⁸ Raúl Peña Cabrera dice que además de ser oral, público y contradictorio; es también continuo y expresa aquí que esta última característica es inspiración del sistema acusatorio.

inocencia, entre otros. Sin embargo, como todo y aún más en el Derecho, nada está dicho, no existe una verdad última ni única, y por tanto no debemos encerrarnos en la esfera de lecturas alejadas del razonamiento sino que debemos propender al análisis y siempre ver que hay más allá. Es por eso que no debemos entender al proceso penal como un mecanismo necesariamente largo, tedioso, aburrido y que trae consigo más problemas que soluciones a propósito de a frase popular “es mejor un mal arreglo que un buen juicio”.

El proceso penal no es solamente un rito que se debe cumplir sí o sí; sino que existen mecanismos que acortan los tiempos del proceso y que traen consigo mejores resultados para el Estado, el fiscal, el imputado, el agraviado e inclusive a la sociedad en su conjunto; estos mecanismos no son ajenos o contrarios al derecho sino que se inspiran en principios de este como son el principio de economía y celeridad procesal. Se trata de mecanismos inspirados en la lógica de destituir el movimiento innecesario de la maquinaria jurisdiccional y aun más el evitar que personas humanas se encuentren inmersas en procesos que les perjudican al amparo de la publicidad y demora de este o aun peor, evitar que en los centros carcelarios campee el hacinamiento.

El Nuevo Código Procesal Penal denomina a estos mecanismos: **Procesos Especiales**; estos tienden a abreviar los tiempos del proceso, mediante formas de definición anticipadas a través de la aplicación de mecanismos procesales simplificados⁴⁹.

Lo procesos especiales han contribuido al descongestionamiento de la carga y celeridad procesal en tanto que implican un acortamiento de las etapas del proceso penal. Se encuentran tipificados en el libro quinto del código procesal penal de 2004 a partir del artículo 446. Como su propio nombre lo indica, se trata de procesos con características particulares, las mismas que trataremos a continuación. Trataremos también sobre el Principio de Oportunidad (que no forma parte de los procesos especiales) que se encuentra

⁴⁹ DOMENICO PISAPIA, Gian. LINEAMENTI DEL NUOVO PROCESSO PENALE; Padova, 1989; p. 57; citado por Raúl Peña Cabrera en su libro PROCESOS PENALES ESPECIALES.

tipificado en el artículo 2 del libro primero referente a las disposiciones generales en tanto que su importancia toma relieve al tratarse la terminación anticipada y el proceso inmediato como aplicación de criterios de oportunidad.

El libro quinto del NCPP encierra como procesos especiales a los siguientes: El proceso inmediato, El proceso por razón de Función Pública, el Proceso de Seguridad, Proceso por Delito de Ejercicio Privado de la Acción Penal, El Proceso de Terminación Anticipada, Proceso de Colaboración Eficaz y el Proceso por Faltas; cada una de las cuales son tratadas en secciones del libro quinto del NCPP; pero para efectos del presente trabajo de investigación sólo trataremos: El Proceso Inmediato, Principio de Oportunidad y el proceso de Terminación Anticipada).

1. EL PROCESO INMEDIATO⁵⁰:

Es un procedimiento **especial** que tiene como finalidad evitar seguir con las tres etapas regulares del nuevo proceso penal⁵¹; mediante él se acorta la etapa de investigación preparatoria y se salta la etapa intermedia de manera tal que el juez de la investigación preparatoria (que es un juez de garantías) remitirá la acusación al juez penal para que este último emita acumulativamente el auto de enjuiciamiento y la citación a juicio. Así se dispensa de la etapa intermedia y por tanto de la audiencia de control de la acusación o la audiencia preliminar. Vale decir, que este proceso especial es una de las más importantes herramientas brindadas por el NCPP para la aplicación de la justicia penal en tanto que implica un acortamiento de los plazos que coadyuva a la celeridad procesal y el descongestionamiento de la carga procesal.

No en cualquier caso se puede aplicar el proceso inmediato sino que debe encontrarse inmerso en uno de los siguientes supuestos:

⁵⁰ Art. 446 NCPP.

⁵¹ Etapa preliminar, etapa intermedia y juzgamiento.

- Cuando el imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito.
- Cuando el imputado ha confesado la comisión del delito.
- Cuando los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares, y previo interrogatorio del imputado, sean evidentes.

Se trata de que solamente se aplique el proceso inmediato a casos en los que la culpabilidad del imputado es evidente; de manera tal que al no haber duda alguna de la culpabilidad, se puede prescindir de la totalidad de las etapas del proceso. Al respecto existen críticas en tanto que algunos tienen la creencia que se está desnaturalizando el proceso mismo, cuestión que veremos mas adelante, pero que adelantamos, es incorrecta en tanto que la aplicación de estos procesos especiales implica por el contrario, la concreta realización de criterios de oportunidad al amparo de un proceso de corte acusatorio y del espíritu del NCPP.

En el artículo 447 y 448 el NCPP se trata sobre el trámite del proceso inmediato; al respecto expresa que el Fiscal, sin perjuicio de solicitar las medidas de coerción que corresponda, se dirigirá al Juez de la Investigación Preparatoria⁵² formulando el requerimiento de Proceso Inmediato. El requerimiento se presentará luego de culminar las diligencias preliminares o, en su defecto, antes de los treinta días de formalizada la Investigación Preparatoria. En su apartado 2 expresa que se acompañará el requerimiento al expediente fiscal.

El pedido de proceso inmediato será puesto en conocimiento de las partes en el término de tres días y resolverá en igual plazo si procede el proceso inmediato o lo rechaza; cuestión que denota también la importancia del control de los plazos para lograr una justicia penal célere pero con sujeción a un debido proceso. Por último, de proceder el requerimiento, el Fiscal formula acusación y el juez de la investigación preparatoria la remite al juez de juzgamiento para que este dicte acumulativamente el auto de enjuiciamiento y la citación a juicio oral.

⁵² Juez de garantías.

1.1. DELITOS A LOS QUE SE APLICA EL PROCESO INMEDIATO.

El procedimiento inmediato no cuenta con una reglamentación taxativa en nuestro ordenamiento jurídico pena o procesal penal respecto de a qué delitos es aplicable, por lo que se entiende que puede aplicarse a cualquier delito en tanto que no tiene naturaleza premial, vale decir, que no existe obligación de atenuar la pena o a reducirla al momento de la prognosis de la misma sino que el espíritu de la norma está amparado en principios como la celeridad y economía procesal. Obviamente si un fiscal tiene a un imputado al que se le encontró en flagrante delito, confesó la comisión de su delito o existen pruebas suficientes que demuestren la culpabilidad del imputado; existe también gran posibilidad de que se logre una condena; es decir, que el fiscal se encuentra en una suerte de posición dominante en tanto que tiene **“la sartén por el mango”** lo que se concreta en el hecho de que el imputado - al verse acorralado- tome la iniciativa o acepte incoar el proceso inmediato para instarse la iniciación del proceso de terminación anticipada⁵³.

Lo anteriormente expuesto es muestra de la importante herramienta que resulta el proceso inmediato en tanto que por un lado es un medio para lograr la ansiada celeridad en los procesos y por otro, un medio para que el imputado logre la reducción de la pena al amparo de la terminación anticipada que otorga una suerte de premio al imputado.

2. EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA.

2.1. GENERALIDADES:

El proceso de Terminación Anticipada constituye una herramienta de simplificación o acortamiento de Las etapas del proceso penal concordante con las modernas corrientes doctrinarias que privilegian **el acuerdo**; esto es, que mediante la fórmula del consenso, se evita la etapa de instrucción y

⁵³ Para el proceso inmediato no se requiere de la aceptación del imputado sino que al amparo del apartado 3 del artículo 448 del NCPP, antes de la formulación de la acusación, a pedido del imputado puede instarse la iniciación del proceso de terminación anticipada.

juzgamiento que se hacen innecesarios y por tanto se sentencia anticipadamente.

El proceso de Terminación Anticipada no resulta ser una novedad introducida por el código procesal penal de 2004 sino que se introduce a nuestra legislación a través de la Ley N° 26320 del 02 de junio de 1994; señalando en su artículo 2° que "*... los procesos por delitos de tráfico ilícito de drogas previsto en los artículos 296°, 298°, 300°, 301, 302° podrán terminar anticipadamente Posteriormente, en el año 2003, el numeral 20 de la Ley 28008 de fecha 19 de junio expresa que esta institución también es aplicable para los Delitos Aduaneros.*

La institución en comento tiene como antecedente inmediato el artículo 37 del código de procedimientos penales colombiano del año 1991 inspirado en el artículo 444 del código procesal italiano del año 1988 donde aparece la institución del patteggiamento. A propósito de esta institución expresamos que el código de procedimiento penal italiano (codice di procedura penale italiano) consagra la figura del patteggiamento o aplicación de la pena a instancia de las partes y al respecto expresa Marconi, que dicha figura constituye el exponente máximo de la justicia negociada en el ordenamiento italiano.

En la actualidad la institución de la Terminación Anticipada expresada en el nuevo código procesal penal *se hace extensiva a todos los delitos sujetos al ejercicio público de la acción penal.* Al respecto expresamos que los artículos 468° al 471° del Nuevo Código Procesal Penal referidos al proceso especial de la Terminación Anticipada, entraron en vigencia en todo el país el 01 de febrero del año 2006, conforme al inciso 4 de la 1ra D.C. y F del D.Leg 957 y ratificado por el artículo Único de la Ley 28460 del 11 de enero del 2005 y el artículo 1° de la Ley N°28671 del 31 de enero de 2006.

2.2. CONCEPTO:

El Tribunal Constitucional define el proceso de la Terminación Anticipada como el acuerdo entre el procesado y la fiscalía con admisión de culpabilidad de alguno o algunos de los cargos que se formulan, permitiéndole al acusado la obtención de la disminución punitiva.⁵⁴

San Martín señala que el proceso de terminación anticipada se sitúa en la necesidad de conseguir una justicia más rápida y eficaz; pero respetando el principio de legalidad procesal; la idea de simplificación del procedimiento parte en este modelo del principio de consenso⁵⁵, lo que significa que este proceso habrá cumplido su objetivo solamente si el imputado y el fiscal llegan a un acuerdo sobre las circunstancias del hecho punible; la pena (calidad y cantidad); la reparación civil y las consecuencias accesorias a imponer.

El Doctor Pablo Sánchez Velarde, define a la Terminación anticipada como el proceso que se introduce como uno de los mecanismos de simplificación del proceso, que modernamente ha sido incorporado en los códigos procesales y que su finalidad es evitar la continuación de la investigación judicial y el juzgamiento, si de por medio existe un acuerdo entre el imputado y el Fiscal, aceptando los cargos de imputación, el primero y obteniendo por ello, el beneficio de la reducción de la pena de una sexta parte. Se trata en esencia en una transacción penal para evitar un proceso innecesario⁵⁶.

De otro lado, siguiendo a *Lobello Villamizar* podemos definir la TERMINACIÓN ANTICIPADA como un rito procesal extraordinario mediante el cual el juez, por una sola vez, desde el momento que se inicia la investigación y hasta antes de la fijación de fecha para la audiencia pública, a pedido del fiscal o del sindicado, celebra una audiencia especial en la que debe intervenir el Ministerio Público. Durante ella, si se llega a un acuerdo entre las partes acerca de la calificación del hecho delictuoso y de la pena imponible, que el

⁵⁴ Sánchez Velarde Pablo, Manual de Derecho Procesal Penal. Ideosa, 2004.

⁵⁵ San Martín Castro, Cesar; Manual de Derecho Procesal Penal. Grijley. 2003

⁵⁶ Pablo Sánchez Velarde en la cátedra en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

juez considera procedente, dicta sentencia en que así lo consigna y concede una rebaja de una sexta parte de la pena, acumulable a la de la confesión, si el acto se ha producido durante la investigación.

Si no se produce el acuerdo, continúa el proceso, el juez y el fiscal que han intervenido en la diligencia deberán ser relevados y las declaraciones que el sindicado haya hecho en su contra se tienen como inexistentes.

Nuestra postura es que el proceso de Terminación anticipada forma parte de los procesos especiales y constituye una herramienta que brinda nuestro ordenamiento, para lograr el descongestionamiento de la carga procesal penal que trae, como consecuencia, una justicia célere. El proceso de Terminación Anticipada resulta tener como característica resaltante su naturaleza premial; esto es, que la aplicación del mismo constituye una suerte de premio o incentivo a favor del procesado con la finalidad de acortar las etapas del proceso penal. Tiene por objeto que el caso se resuelva **antes del juicio oral**; concretamente, se trata de llegar a una sentencia en la etapa de investigación preparatoria, basada en un acuerdo entre fiscal e imputado.

El artículo 468 del NCPP trata sobre las reglas que deben observarse para la aplicación de la terminación anticipada; **reglas**, mas no, **supuestos regulados**, lo que posibilita que los fiscales la requieran en cualquier caso. No obstante, es posible afirmar la existencia de casos en los que hay una mayor posibilidad de arribar a un acuerdo (De hecho es más fácil arribar a un acuerdo cuando se dan los supuestos del proceso inmediato)⁵⁷. Por tal motivo, el artículo 448, apartado 3 del NCPP señala que cuando el procedimiento inmediato es fundado, el fiscal puede requerir la terminación anticipada antes de formular acusación.

⁵⁷ En tanto que la aplicación del proceso inmediato supone la certeza de la culpabilidad del imputado proporcionada por alguna de las causales previstas en el artículo 446 del NCPP.

Señala el NCPP en su artículo 468 que, la solicitud de terminación anticipada la puede presentar el fiscal, el imputado o ambos de modo conjunto con un acuerdo provisional, siempre que sea formulada ***antes de que se presente el requerimiento de acusación***; posteriormente el requerimiento fiscal o la solicitud del imputado son puestos a conocimiento de las partes durante cinco días y luego tiene lugar “**por única vez**” la audiencia de terminación anticipada, **de carácter privado**, en la cual, las partes esgrimen sus argumentos y llegan a un acuerdo que es revisado por el juez de la investigación preparatoria que es quien emite sentencia en un plazo no mayor de 48 horas.

2.3. LA AUDIENCIA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA:

En la audiencia de terminación anticipada ***no se actúan pruebas*** sino que el espíritu de la audiencia es **el acuerdo** (acuerdo sobre la pena, la reparación civil y las demás consecuencias accesorias); estando inclusive autorizados, fiscal e imputado a sostener reuniones preparatorias informales. Además, no se impide la continuación del proceso sino que se forma un cuaderno a parte siendo lo único indispensable para la incoación del proceso de terminación anticipada la ***aceptación del imputado*** en caso sea el fiscal quien la solicita o la aceptación del fiscal ***contrario sensu***.

La audiencia de terminación anticipada cuenta con obligatoria asistencia del Fiscal, del Imputado y de su abogado defensor (caso contrario se violentaría el Derecho de Defensa) pero es facultativa la asistencia de los demás sujetos procesales. Instalada esta, el Fiscal presentará los cargos que como consecuencia de la Investigación Preparatoria surjan contra el imputado y éste tiene tres posibilidades al respecto: Aceptarlos en su totalidad, aceptarlos en parte o rechazarlos. La función del Juez de la investigación Preparatoria es explicar al procesado los alcances y consecuencias del acuerdo y las limitaciones que representa la posibilidad de contravenir su responsabilidad con lo que se da paso a que el imputado se pronuncie al respecto, seguido de los demás sujetos procesales que concurran. Luego del

debate, el Juez instará a que lleguen a un acuerdo para luego dictar sentencia dentro de las cuarenta y ocho horas de realizada la audiencia.

2.4. EL ACUERDO:

El acuerdo toma especial relevancia en el proceso penal moderno, constituye “la justicia penal negociada” en la que Fiscal e Imputado deben llegar a un acuerdo sobre las circunstancias del hecho punible, sobre la pena, sobre la reparación civil y sobre las demás consecuencias accesorias a imponer, incluso a la no imposición de la pena privativa de la libertad efectiva conforme a la ley penal; lo que deben declarar al Juez de la investigación preparatoria debiéndose consignar expresamente en el acta respectiva.

2.5. EL JUZGAMIENTO:

Como expresa el apartado seis del artículo 468 del NCPP; si el Juez considera que la calificación jurídica del hecho punible y la pena a imponer, de conformidad con lo acordado, son razonables y **obran elementos de convicción suficientes**, dispondrá en la sentencia la aplicación de la pena indicada, la reparación civil y las consecuencias accesorias que corresponda enunciando en su parte resolutive que ha habido acuerdo.

Esta sentencia que aprueba el acuerdo puede ser apelada por los demás sujetos procesales⁵⁸ los mismos que, según su ámbito de intervención procesal, pueden cuestionar solamente **la legalidad del acuerdo** y, en su caso, el monto de reparación civil, no siendo posible que se pronuncien respecto de la pena. Respecto a la reparación civil cuestionada, el código expresa que la Sala Penal Superior puede incrementar la reparación civil dentro de los límites de la pretensión del actor civil no pudiendo pronunciarse *ultra petita*.

⁵⁸ El NCPP hace referencia a los demás sujetos procesales entendiendo por estos a aquellos que se hayan constituido en parte del proceso penal exceptuando al Fiscal e imputado.

Por otro lado, el artículo 469 del NCPP trata sobre los procesos con pluralidad de hechos punibles o imputados, expresa al respecto que en estos casos se requerirá del acuerdo de todos los imputados y por todos los cargos que se incremine a cada uno. Sin embargo el Juez podrá aprobar acuerdos parciales si la falta de acuerdo se refiere a delitos conexos y en relación con otros imputados, salvo que ello perjudique la investigación o si la acumulación resulta indispensable.

Punto importante trata el artículo 470. NCPP refiriéndose a la declaración inexistente expresando que cuando no se llega a un acuerdo o éste no se ha aprobado, la declaración formulada por el imputado en este proceso se tendrá como inexistente y no podrá ser utilizada en su contra. Este punto es importantísimo en tanto que lleva inmersa la valiosa garantía de la presunción de inocencia. Contrario sensu, si se diera el caso en el que un imputado solicitara la incoación de la terminación anticipada para la cual confesó la comisión de su delito (proceso inmediato) y esta fuera aceptada por el fiscal pero desestimada por el Juez y se pudiera utilizar su declaración en su contra; esta se convertiría sin duda alguna en una maniobra para hacer confesar a los imputados y luego asegurar su condena; pero ello implica la vulneración del derecho de defensa y la violación de la garantía de la presunción de inocencia. Por tanto, nuestra posición es concordante con que la declaración del procesado se tome por inexistente si se desestima el proceso de terminación anticipada al amparo de que lo contrario conllevaría a maniobras engañosas propias de un sistema inquisitivo y por tanto contrarias a un sistema procesal moderno.

2.6. NATURALEZA PREMIAL DEL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA:

La naturaleza premial del proceso de terminación anticipada es un elemento esencial para lograr la colaboración del procesado. Constituye un premio por su contribución con la justicia para lograr que el proceso penal se desarrolle con celeridad y apego a la norma. Es decir, que el procesado

brindará ayuda a los operadores del derecho y colaborará con ellos porque al hacerlo se le reducirá la pena a imponer.

Nuestro nuevo código expresa en su artículo 471 que el imputado que se acoja al proceso de terminación anticipada recibirá un beneficio de reducción de la pena de una sexta parte y que este beneficio es adicional y se acumulará al que reciba el imputado por confesión. Es decir, que se brinda al procesado la posibilidad de hacer más de una reducción sobre la pena a imponérsele; lo cual constituye un enorme incentivo en tanto que el procesado podría resultar con una pena suspendida.

Como expresamos anteriormente lo que se busca es contribuir con la *celeridad procesal* evitando que se active toda la maquinaria jurisdiccional que implica un costo en tiempo y dinero para logra por el contrario un proceso célere. Evitando de esta manera que se continúe con un proceso que se hace innecesario porque se tiene pleno convencimiento de la responsabilidad del procesado.

3. EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD.

3.1. GENERALIDADES:

El Principio de Oportunidad es una herramienta que nos proporciona el nuevo código para el desarrollo de un proceso célere pero con sujeción a la ley; fue incorporado a nuestro ordenamiento jurídico con el código procesal penal de 1991 con la finalidad de descongestionar los centros carcelarios y hoy el legislador del código procesal penal de 2004 lo trata nuevamente pero con un mejor texto.

Se trata de la contraparte del Principio de Legalidad en tanto que se refiere a la abstención del ejercicio de la acción penal del Fiscal (que es el único titular del mismo).

3.2. CONCEPTO:

El Principio de Oportunidad es, a decir de Pepe Melgarejo Barreto, un mecanismo institucionalizado que busca llegar a un acuerdo entre las partes evitando un proceso prolongado y una imposición de la pena⁵⁹; es una alternativa de solución previa a un juicio, agilizando el proceso penal y evitando dilaciones indebidas; se busca obtener una rápida conclusión del proceso e indemnización a la víctima.⁶⁰

Víctor CUBAS VILLANUEVA, citando a CAFFERATA NORES, expresa que este principio es definido como la atribución que tienen los órganos encargados de la promoción de la persecución penal, fundada en razones diversas de política criminal y procesal, de no iniciar la acción, o de suspender provisionalmente la acción iniciada o de limitarla en su extensión objetiva y subjetiva, o de hacerla cesar definitivamente antes de la sentencia, aun cuando concurren las condiciones ordinarias para “perseguir y castigar”⁶¹

Pablo SANCHEZ VELARDE expresa que el principio en mención constituye un mecanismo de simplificación del proceso penal, considerado como una excepción al principio de legalidad que exige la persecución de los delitos y la sanción a las personas que lo han cometido, pero este principio no es absoluto sino regulado por la propia ley, de allí que se hable del principio de oportunidad reglado. Es decir, la ley establece en qué casos es posible su aplicación, los delitos de mínima y mediana criminalidad, y a qué personas está dirigido (exceptuándose a los funcionarios públicos que cometan el delito en ejercicio de su cargo). Se pretende que para determinados delitos se posibilite la realización de un acuerdo o consenso entre las partes en conflicto penal expuesto ante la autoridad fiscal a fin de que se archive la investigación o el

⁵⁹ EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL; Pepe MELGAREJO BARRETO; Jurista Editores; p. 27; 2006.

⁶⁰ bis.; p. 30.

⁶¹ Víctor CUBAS VILLANUEVA. EL PROCESO PENAL. Teoría, Jurisprudencia y Práctica. 6ta Edición. pag. 250 y 251 citando a Caffetara Nores, José. Cuestiones actuales sobre el proceso penal, Buenos Aires, Editores del Puerto, 1997, pag.16.

proceso, dependiendo del caso y, de otro lado, se repare el daño causado a la víctima del hecho punible respetándose la indemnización acordada⁶².

También expresa Pablo Ernesto LÉVANO VÉLIZ⁶³ que una posición coincidente de los doctrinarios se orienta a señalar que el Principio de Oportunidad se constituye en el mecanismo consensual de terminación anticipada del proceso mediante el cual se materializa la posibilidad de dar solución a hechos jurídicos penales de poca trascendencia o relevancia, siendo estos casos los que precisamente de modo injustificado sobrecargan en la actualidad y desde hace ya buen tiempo, la administración de justicia penal peruana. Así el también llamado criterio de oportunidad permite realizar un selección de conductas que a través de fórmulas de acuerdo o de transacción penal, pueden llegar a culminar anticipadamente, es decir, sin llegar incluso a la etapa de emitirse sentencia cuando se trata de un proceso penal ya instaurado y en la generalidad de los casos, sin recurrirse al inicio de la instrucción o en otras palabras, cuando se está llevando aún a cabo la investigación preliminar en sede Fiscal⁶⁴.

De las diversas posiciones que la doctrina expresa sobre el principio de oportunidad podemos decir que es la facultad que tiene el Ministerio Público, como titular del ejercicio de la acción penal pública, de abstenerse del mismo, o en su caso, de solicitar ante al órgano jurisdiccional el sobreseimiento de la causa, siempre que existan elementos probatorios de la real comisión del delito y se encuentre acreditada la vinculación con el imputado, el mismo que debe prestar su consentimiento para la aplicación del principio en mención

⁶² Pablo SÁNCHEZ VELARDE. INTRODUCCIÓN AL NUEVO PROCESO PENAL.IDEMSA 2006. Pag. 58 y 59.

⁶³ Fiscal Adjunto Provincial de la sexta fiscalía provincial penal del cono norte de lima.

⁶⁴ Revista jurídica del Ministerio Público del Distrito Judicial del Cono Norte de Lima. VISTA FISCAL. La Aplicación del Principio de Oportunidad en el Ordenamiento Procesal Peruano. Pablo Ernesto LÉVANO VÉLIZ. Pag. 100 y 101. Noviembre 2003; año I –Nº1

Nuestra posición es que existen dos formas de entender el principio de Oportunidad. En la primera, este se manifiesta como la excepción al principio de legalidad, por medio de la cual, siempre que se reúnan ciertos requisitos taxativamente determinados, el Fiscal podrá abstenerse de ejercitar la acción penal. La segunda forma es más general y la entendemos como *criterios de oportunidad* que buscan la realización de un proceso penal con celeridad; dentro del cual podemos ubicar al proceso de terminación anticipada.

3.3. DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN OTROS PAÍSES.

- **Legislación Alemana:** Señala Pepe Melgarejo Barreto que este Principio de Oportunidad habría aparecido en Alemania a través de la **Ley Enminger** del 04 de mayo de 1924 en la que se faculta al Ministerio Público para poder abstenerse de ejercitar la acción penal en los casos en que la culpa sea leve y carezcan de importancia las consecuencias dañosas, de tal manera que su persecución no afecte el interés público; conforme a estos argumentos los asuntos de bagatela no caben en el principio de legalidad, pero sí en el principio de Oportunidad(Art. 153 de la ley procesal penal alemana)⁶⁵.
- **Legislación Norteamericana:** En el sistema angloamericano, contrariamente a nuestro sistema, se desconoce el Principio de Legalidad y por el contrario la regla es la aplicación de criterios de Oportunidad; aquí el Ministerio Público tiene el poder de selección y se plantea como instrumento de simplificación **EL PLEA BARGAINING** por el cual se trata de evitar un proceso prolongado o una condena mayor a la prevista, gracias al acuerdo entre las partes. Para la configuración de esta institución, el imputado debe declararse culpable de los hechos que se le imputan y debe renunciar al derecho a que se le siga un proceso judicial porque, contrario sensu, se estaría violando derechos: el de defensa y presunción de inocencia; que como dijimos anteriormente, son fundamentales para la existencia de un sistema procesal penal acusatorio (o acusatorio garantista – a decir de otros).

⁶⁵ Bis.; p.32

En los Estados Unidos de Norteamérica entre el 75% al 90% de las causas penales accionadas, terminan en el uso del **PLEA BARGAINING**⁶⁶ que es la utilización de criterios de Oportunidad.

- **Legislación Española:** En España encontramos el “proceso penal abreviado” que se conoce en ese país con el nombre de “conformidad del acusado” o “confesión del procesado”; se negocia con el Ministerio Fiscal (entendamos por esto, Ministerio Público⁶⁷). Dentro de las medidas comprendidas en la reforma global de la justicia penal española se encuentra el sobreseimiento por razones de Oportunidad en virtud de la cual se busca obtener una rápida indemnización de la víctima y la reinserción social del imputado⁶⁸.
- **Legislación Portuguesa:** Los artículos 280 y 281 del Código de Procesal Penal Portugués establecen la posibilidad de archivar el proceso cuando al hecho punible le corresponde dispensa o exención de la pena; también se establece la suspensión provisional del proceso, como otra alternativa, si es que el delito fuese castigado con pena no superior a tres años o con sanción distinta, imponiendo el Juez Penal obligaciones o reglas de conducta. Sin embargo, no se encuentra regulado el Principio de Oportunidad por lo que el Ministerio Público tiene que actuar en tanto conozca de un hecho delictivo.
- **Legislación Italiana:** En Italia está regulada la figura del **PATTEGIAMENTO** que es el acuerdo sobre la forma y pena entre las partes, es decir entre el imputado y el Fiscal a pedido del primero. El Juez puede entonces dictar sentencia sin necesidad del Juicio Oral y puede también reducir la pena; pero para todo debe corroborar la voluntad de las

⁶⁶ TIMOTHY CORNISH; Conferencia Nacional de la Justicia Penal; Lima – 1993.; extraída de “Ciencias Jurídicas” de El Salvador – 1992; tomado por PEPE MELGAREJO BARRETO en su libro EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL.

⁶⁷ En España se considera sólo por terminología, a la Procuraduría Pública.

⁶⁸ EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL; Pepe MELGAREJO BARRETO; Jurista Editores; p. 34; 2006.

partes. También puede rechazar la solicitud de las propuestas a que han llegado las partes, si no son las correctas.

- **Legislación Inglesa:** Se regula la figura del ***GUILTY PLEA***. Este mecanismo es la aplicación de criterios de Oportunidad que busca evitar un juicio de condena o una pena mayor. Una característica especial es la elasticidad por lo que se permite el acuerdo extremo entre las partes.

También están regulados criterios de Oportunidad en países de Sudamérica a parte del nuestro como Colombia, lo que pasamos a comentar brevemente.

- **Legislación Colombiana:** El Código de Procedimientos Penales de Colombia en su artículo 38 regula lo referente a los delitos que admiten desistimiento y aquellos que permiten la preclusión de la investigación por indemnización integral de perjuicios. En esta legislación, en lo pertinente a criterios de Oportunidad, podemos decir que se busca un acuerdo entre el imputado y las víctimas (perjudicados⁶⁹) que se manifiesta en una reparación estrictamente pecuniaria. Luego de esta reparación económica se produce la Terminación del Proceso lográndose así la descongestión de los despachos judiciales.

3.4. ANTECEDENTES Y MARCO NORMATIVO:

El Principio de Oportunidad tampoco es una novedad introducida por el código procesal penal de 2004 sino que se introdujo a nuestra legislación mediante el Código Procesal Penal de 1991(Decreto Legislativo N° 638 publicado el 27 de abril). Este lo expone en su artículo 2° y luego se modifica por la Ley N° 28117 del 10 de diciembre del año 2003. Posteriormente se emitieron disposiciones como la Circular N° 006-95-MP-FN del año 1995, a fin de que las Fiscalías Provinciales que conocieran casos de índole penal,

⁶⁹ El término perjudicado es un término estrictamente procesal (perjudicado por el delito)

aplicaran el principio de oportunidad de la forma en que estimasen conveniente. Con posterioridad, al amparo de la resolución de Consejo Transitorio N° 200-2001-CT-MP de fecha 20 de abril de 2001 posteriormente modificada por la Resolución de Consejo Transitorio del Ministerio Público N° 266-2001-CT-MP de fecha 27 de abril de 2001 y por resolución de fiscalía de la Nación N° 651-2001-MP-FN de fecha 19 de junio de 2001 se crea como plan piloto, las Fiscalías Provinciales Especializadas en la aplicación del Principio de Oportunidad para que rijan sus funciones en base a los mencionados.

Finalmente, fue devuelta la competencia a todas las Fiscalías Provinciales Penales o Mixtas para aplicar el principio de oportunidad, desarrollándose el procedimiento de acuerdo a lo establecido en la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1470-2005-MP-FN de fecha 12 de julio del año 2005 y su Anexo, Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1470-2005-MP-FN de fecha 22 de julio del año 2005, modificado por Fe de erratas de fecha 07 de agosto de 2005 y complementado con la Resolución de la Gerencia General de la Fiscalía de la Nación N° 398-2005-MP-FN-GG del 10 de agosto de 2005.

3.5. FORMA DE MANIFESTACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD.

- **Voluntaria** : Cuando se hace evidente la culpabilidad del sujeto agente.
- **Estructural inducida** : Cuando el sujeto se acoge a criterios de oportunidad para la obtención de una pena menor que se otorga dada la naturaleza premial de esta institución.
- **Negociada** : Cuando se logra un acuerdo entre el fiscal y el imputado(o su abogado defensor) antes de la vista de la causa, respecto del delito o de la

pena, o de ambos. Luego el Fiscal recomendará al Juez ser “indulgente”.

3.6. EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL.

El Nuevo Código Procesal Penal regula el Principio de Oportunidad en el artículo 2º de su Libro Primero, Sección I (La Acción Penal). Dice en su apartado uno que el Ministerio Público, de Oficio o a pedido del imputado y con su consentimiento, podrá abstenerse de ejercitar la acción penal en cualquiera de los siguientes casos:

- a) Cuando el agente haya sido afectado gravemente por las consecuencias de su delito, culposo o doloso, siempre que este último sea reprimido con pena privativa de libertad no mayor de cuatro años, y la pena resulte innecesaria.

Es notoria la aplicación restringida a determinados hechos delictuosos: delitos de pequeña y mediana criminalidad⁷⁰. Se busca que los centros carcelarios no se llenen de seres humanos que se encuentran sin sentencia o simplemente se busca evitar un procedimiento engorroso con pérdida de tiempo y dinero.

El literal b) expresa que el Fiscal podrá abstenerse de ejercitar la acción penal cuando se trate de delitos que no afecten gravemente el interés público, salvo cuando el extremo mínimo de la pena sea superior a dos años de pena privativa de libertad, o hubiesen sido cometidos por un funcionario público en ejercicio de su cargo.

El literal c) expresa que se puede aplicar Principio de oportunidad cuando conforme a las circunstancias de hecho y a las condiciones personales

⁷⁰ Raúl PEÑA CABRERA; PROCESOS PENALES ESPECIALES; Gráfico “El Tribunal” de Hogarth; 1997; p. 31.

del denunciado, el Fiscal puede apreciar que concurren los supuestos atenuantes de Error de Tipo. Error de prohibición del artículo 14°, Error de comprensión culturalmente condicionado del artículo 15°, Tentativa del artículo 16°, Responsabilidad Atenuada del artículo 21°, Responsabilidad Restringida por Razón de Edad del artículo 22°, y Complicidad Primaria y Secundaria del artículo 25° del Código Penal, y se advierta que no existe ningún interés público gravemente comprometido en su persecución. No será posible cuando se trate de un delito conminado con una sanción superior a cuatro años de pena privativa de libertad o cometido por funcionario público en ejercicio de su cargo.

En su apartado dos, expresa que en los supuestos previstos en los incisos b) y c) del numeral anterior, será necesario que el agente hubiere reparado los daños y perjuicios ocasionados o exista acuerdo con el agraviado en ese sentido.

El apartado tres hace referencia al procedimiento para acogerse al Principio de Oportunidad. El Fiscal citará al imputado y al agraviado con el fin de realizar la “diligencia de acuerdo”, dejándose constancia en acta. En caso de inasistencia del agraviado, el Fiscal podrá determinar el monto de la reparación civil que corresponda. Si no se llega a un acuerdo sobre el plazo para el pago de la reparación civil, el Fiscal lo fijará sin que éste exceda de nueve meses. No será necesaria la referida diligencia si el imputado y la víctima llegan a un acuerdo y éste consta en instrumento público o documento privado legalizado notarialmente.

En su apartado 4 refiere que realizada la diligencia de acuerdo y satisfecha la reparación civil, el Fiscal expedirá una *Disposición de Abstención* del ejercicio de la acción penal. Esta disposición impide, bajo sanción de nulidad, que otro Fiscal pueda promover u ordenar que se promueva acción penal por una denuncia que contenga los mismos hechos. De existir un plazo para el pago de la reparación civil, se suspenderán los efectos de dicha decisión hasta su efectivo cumplimiento. El legislador ha establecido castigar el incumplimiento del pago fijando que en este caso el Fiscal dictará Disposición para la promoción de la acción penal, la cual no será impugnabile.

El apartado cinco expresa, que si el Fiscal considera imprescindible, para suprimir el interés público en la persecución, sin oponerse a la gravedad de la responsabilidad, imponer adicionalmente el pago de un importe a favor de una institución de interés social o del Estado y la aplicación de las reglas de conducta previstas en el artículo 64 del Código Penal, solicitará la aprobación de la abstención al Juez de la Investigación Preparatoria, el que la resolverá previa audiencia de los interesados. A este respecto son aplicables las disposiciones del numeral 4) del presente artículo.

El apartado seis expresa que independientemente de los casos establecidos en el numeral 1) procederá un acuerdo reparatorio en los delitos de lesiones leves del artículo 122°, hurto simple del artículo 185°, hurto de huso del artículo 187°, hurto de ganado del artículo 189°-A en su primer párrafo, apropiación ilícita del artículo 190°, sustracción de bien propio del art. 191°, apropiación por error o de bien perdido del art. 192°, apropiación de prenda del art. 193°, estafa del art. 196°, defraudaciones, fraude procesal, abuso de firma en blanco, alteración de cuentas y estelionato del art. 197°, fraude en la administración de personas jurídicas del art. 198°, daño simple del art. 205° y libramiento y cobro indebido del art. 215° del Código Penal, y en los delitos culposos. No rige esta regla cuando haya pluralidad importante de víctimas o concurso con otro delito, salvo que, en este último caso, sea de menor gravedad o que afecte bienes jurídicos disponibles.

El código no es claro cuando menciona lo de la *pluralidad importante de víctimas* lo que genera un punto de discusión que puede ser fácilmente salvable.

El Fiscal de oficio o a pedido del imputado o de la víctima propondrá un acuerdo reparatorio. Si ambos convienen el mismo, el Fiscal se abstendrá de ejercitar la acción la penal. Si el imputado no concurre a la segunda citación o se ignora su domicilio o paradero, el Fiscal promoverá la acción penal. Rige en lo pertinente el numeral 3).

El apartado siete expresa que si la acción penal hubiera sido promovida, el Juez de la investigación preparatoria, previa audiencia, podrá a petición del Ministerio Público, con la aprobación del imputado y citación del agraviado, dictar auto de sobreseimiento – con o sin las reglas fijadas en el numeral 5) – hasta antes de formularse la acusación, bajo los supuestos ya establecidos.

Esta resolución no será impugnabile, salvo en cuanto al monto de la reparación civil si ésta es fijada por el Juez ante la inexistencia de acuerdo entre el imputado y la víctima, o respecto a las reglas impuestas si éstas son desproporcionadas y afectan irrazonablemente la situación jurídica del imputado.

Tratándose de los supuestos previstos en el numeral 6), basta la presentación del acuerdo reparatorio en un instrumento público o documento privado legalizado notarialmente, para que el Juez dicte auto de sobreseimiento.

3.7. REQUISITOS PARA LA APLICACIÓN DE PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD:

En nuestro código adjetivo penal (1991) hallamos los presupuestos o condiciones necesarias para su aplicación, siendo factible ésta cuando el agente haya sido afectado gravemente por las consecuencias de su delito y la pena resulte inapropiada; cuando se trate de delitos que por su insignificancia o su poca frecuencia no afecten gravemente el interés público, siempre que su pena mínima no supere los dos años de pena privativa de libertad y el agente no sea funcionario público en ejercicio de su cargo; o cuando la culpabilidad del agente en la comisión del delito, o en su contribución a la perpetración del mismo sean mínimos, prevaleciendo la prohibición que el agente sea funcionario público en ejercicio de su cargo.

Siendo necesaria, en los dos últimos supuestos, la reparación el daño ocasionado a la víctima o la existencia de un acuerdo respecto a la reparación

civil. Asimismo, se precisa que tal acuerdo puede constar en instrumento público o documento privado legalizado por Notario, caso en el cual, no será necesario que las partes presten su consentimiento expreso para la aplicación del Principio de Oportunidad.

Y en la hipótesis en que la acción penal hubiera sido ya ejercida, el Juez podrá, a petición del Ministerio Público, o de la parte agraviada, dictar auto de sobreseimiento en cualquier etapa del proceso, bajo los supuestos ya establecidos, en un plazo no mayor de 10 días. Señalando, finalmente, que en los delitos de lesiones leves, hurto simple, apropiación ilícita y en los delitos culposos, en los que no haya pluralidad de víctimas o concurso con otro delito, antes de formalizar la denuncia penal, el Fiscal citará al imputado y a la víctima para proponerles un acuerdo reparatorio. Absteniéndose de ejercitar la acción penal en caso que las partes arribaran a un acuerdo y formalizando denuncia en caso contrario, o ante la incomparecencia del imputado a la segunda citación o se ignora su domicilio.

A continuación detallaremos cada requisito para la aplicación del Principio de Oportunidad:

3.7.1 CONVENCIMIENTO DEL DELITO Y DE LA VINCULACIÓN DE SU AUTOR O PARTÍCIPE:

Para la aplicación del principio de Oportunidad el fiscal debe tener certeza de la existencia de indicios suficientes o elementos de juicio reveladores de la comisión del delito, además, debe demostrar la vinculación del autor o partícipe con la comisión del ilícito y por último, debe identificar plenamente al sujeto actor, es decir, el Fiscal debe tener convicción de que la conducta es típica y antijurídica además de identificar plenamente al sujeto que cometió el ilícito penal.

Si el fiscal no observa alguno de los puntos antes expuestos, no sería el derecho penal el que debe encargarse, en tanto que el mismo es de aplicación de *ultima ratio*. Sin embargo, es importante destacar que la aplicación del Principio de Oportunidad no es para la totalidad de los delitos sino que se

restringe para un pequeño grupo llamado delitos “de bagatela”. Esto es, delitos de mediana y pequeña relevancia.

El convencimiento de la comisión del hecho delictivo y la vinculación del autor o partícipe con el mismo supone un requisito ***sine qua non*** para la aplicación del Principio de Oportunidad puesto que, el principio en mención requiere de la aceptación de los hechos. Esto es, que el imputado podría no aceptar la comisión de un hecho si es que resulta difícil probar la comisión del delito y que se demuestre que el mismo fue cometido por tal o cual persona; esto, por que sería más conveniente asumir la posición de la negación. De esta manera, no puede aplicarse este principio si no se cuenta con estos elementos que constituyen los pilares sobre los que se sostiene.

3.7.2. CONSENTIMIENTO EXPRESO DEL IMPUTADO:

El NCPP mejora el texto sobre el Principio de Oportunidad del código procesal penal de 1991 y expresa literalmente en su artículo dos que el Ministerio Público, de Oficio o a pedido del imputado ***y con su consentimiento(...)*** haciendo resaltar que no se puede incoar el Principio de Oportunidad sin que el imputado dé su consentimiento expreso; de estas líneas se deduce que el imputado debe aceptar la comisión de su delito en tanto que aceptarla es requisito ***sine qua non*** para la aplicación del Principio de Oportunidad. Aplicar el Principio de Oportunidad sin consentimiento del imputado constituiría indudablemente una vulneración al derecho de defensa y a la presunción de inocencia; por tanto, al amparo del espíritu inmerso en el nuevo modelo procesal penal y de la literalidad analizada del artículo comentado líneas antes, expresamos que no existe caso alguno en el que se pueda aplicar el principio en mención si no se cuenta con el consentimiento del imputado.

3.7.2 FALTA DE NECESIDAD DE PENA:

El requisito de la falta de necesidad de la pena implica que la misma no se hace necesaria en tanto que el imputado se ve afectado por las consecuencias dañosas de su acto. Constituye la idea de ya haber sido castigado por las propias consecuencias de su acto. Al respecto es importante resaltar la valoración de delitos dolosos (con pena privativa de libertad no mayor de cuatro años) o culposos, en los cuales el imputado haya sido afectado gravemente física o psicológicamente como consecuencia de su delito, lo que se manifiesta en una suerte de “**autor-víctima**” por lo que no sería necesario sancionarlo al amparo de que ya ha sufrido una suerte de sanción.

La pena ya se hace innecesaria porque es también víctima; esto al amparo de recaer sobre el autor, las consecuencias dañosas de su actuar.

3.7.4 FALTA DE MERECEIMIENTO DE PENA:

La falta de merecimiento de la pena es un elemento importante para la aplicación del Principio de Oportunidad que se manifiesta en el hecho de que el delito sea insignificante o de mediana gravedad de manera que no tenga un gran impacto social o afecte el interés público; en otras palabras, se trata de los delitos de bagatela o poca monta en los cuales se presenta la exigencia de que la pena conminada en su extremo mínimo legal, sea dos años de pena privativa de libertad.

Este requisito supone la insignificancia del delito que se traduce en que la pena resulte innecesaria.

3.7.5. CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES POR MÍNIMA RESPONSABILIDAD O CULPABILIDAD:

Al respecto hablamos de la imputabilidad restringida que se manifiesta en la disminución de la culpabilidad como es el caso de la edad del agente que trata el artículo 20 del Código Penal que expresa en su apartado 2 que el

menor de 18 años (está exento de responsabilidad penal) y la responsabilidad restringida por la edad del artículo 22 del código penal que expresa que podrá reducirse prudencialmente la pena señalada para el hecho punible cometido cuando el agente tenga más de dieciocho años y menos de veintiuno o más de sesenta y cinco, al momento de realizar la infracción.

También se encuadra este supuesto cuando conforme a las circunstancias de hecho y a las condiciones personales del denunciado, el Fiscal puede apreciar que concurren los supuestos atenuantes de Error de Tipo. Error de prohibición del artículo 14º, Error de comprensión culturalmente condicionado del artículo 15º, Tentativa del artículo 16º, Responsabilidad Atenuada del artículo 21º, la Responsabilidad Restringida por Razón de Edad del artículo 22º, y Complicidad Primaria y Secundaria del artículo 25º del Código Penal, y se advierta que no existe ningún interés público gravemente comprometido en su persecución. No será posible cuando se trate de un delito conminado con una sanción superior a cuatro años de pena privativa de libertad o cometido por funcionario público en ejercicio de su cargo.

3.7.6 EXCLUSIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS:

En los casos de falta de merecimiento de pena y mínima culpabilidad, se proscribe la aplicación de criterios de oportunidad cuando el imputado sea funcionario público y el delito sea cometido en ejercicio de sus funciones; al respecto se presenta el caso por ejemplo de efectivos policiales, alcaldes, prefectos etc. que se encuentran en actividad de sus funciones y comenten actos arbitrarios, apropiaciones indebidas de los recaudos que se les ha confiado en razón de su función. Esto, al amparo del agravante que constituye el abusar del cargo público.

Es preciso señalar que en el supuesto de Falta de Necesidad de Pena, se deja abierta la posibilidad de aplicarse estos criterios de oportunidad con los funcionarios públicos, porque la ley no lo prohíbe expresamente⁷¹. Sin embargo

⁷¹ Pepe MELGAREJO BARRETO; EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL; Jurista Editores; p. 124.

se hace difícil que se presenten conductas delictivas para determinados casos específicos.

3.7.6. OBLIGACIÓN DE PAGO O ACUERDO DE LA REPARACIÓN CIVIL:

Este elemento es importantísimo y constituye la necesidad del imputado de haber cumplido con el pago total de la reparación civil que es la restitución del bien o el pago de su valor y la indemnización por los daños y perjuicios.

Al respecto, podría darse el caso de que el imputado y la víctima lleguen a un acuerdo en el que no sea necesaria la reparación; cuestión que no se prohíbe en tanto que es facultad de la parte agraviada pronunciarse respecto de la misma pero no respecto de la continuación de la aplicación del principio de legalidad que es facultad de la fiscalía.

Importante mención merece a ese respecto el hecho de que el imputado debe cumplir el pago total de la reparación civil, pues caso contrario, y de no hacerlo, al amparo del numeral 4 del artículo 2 NCPP, en su último párrafo, se dictará Disposición para la promoción de la acción penal(...)

CAPÍTULO III

LOGROS OBTENIDOS CON LA APLICACIÓN DEL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL EN EL DISTRITO JUDICIAL DE HUAURA.

En el presente capítulo trataremos concisamente los logros obtenidos con la aplicación del proceso de Terminación Anticipada y el Principio de Oportunidad en el Distrito Judicial de Huaura. Así también mostraremos estadísticas que demuestran el gran impacto que se ha conseguido - en Huaura - con su utilización.

1. EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA EN EL DISTRITO JUDICIAL DE HUAURA Y EN TODO EL TERRITORIO PATRIO.

1.1 GENERALIDADES:

El Proceso de Terminación Anticipada está vigente desde el 1º de junio de 2006 en todo el Perú, tanto para el código de 1940 como para el código vigente en la Corte superior de justicia de Huaura. Esto al amparo de la primera Disposición Final del NCPP que expresa que El Código procesal Penal entrará en vigencia progresivamente en los Distritos Judiciales según Calendario Oficial, aprobado por Decreto Supremo, dictado de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo que establecerá las normas complementarias y de implementación del Código Procesal Penal; continúa diciendo que el día 1 de julio de 2006 se pondrá en vigencia este código en el Distrito Judicial designado por la Comisión Especial de Implementación creada por Decreto Legislativo N° 958. El Distrito Judicial de Lima será el Distrito Judicial en que culminará la aplicación progresiva del NCPP. El mencionado Decreto Legislativo establecerá, asimismo, las disposiciones transitorias y las referidas al tratamiento de los procesos seguidos con arreglo a la legislación anterior; y en su numeral cuarto establece que, no obstante lo dispuesto en el numeral 2, el primero de febrero de 2006 entrarán en vigencia en todo el país

los artículos 468°-471° y el Libro Séptimo” La Cooperación Judicial Internacional” y las disposiciones modificatorias contenidas en este código, excepto las contenidas en los numerales 5, 6 y 7 de la Segunda Disposición Modificatoria, que entrarán en vigencia el 1 de julio de 2006.

1.2. LOGROS OBTENIDOS CON LA APLICACIÓN DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA EN HUAURA:

El proceso de Terminación Anticipada constituye la medida de celeridad procesal más importante en la aplicación del nuevo proceso penal en tanto que ha llegado a tener un 71% de los requerimientos fiscales en los Juzgados de la Investigación Preparatoria de Huaura, constituyéndose en el indicador más significativo de los procesos resueltos en cuatro meses.

El distrito judicial de Huaura sigue la lógica del nuevo código y por ello, al amparo de la norma, se realizan acuerdos, de manera que se ha evitado que un gran número de procesos lleguen a juicio oral por que se ha dictado sentencia anticipada. Este es el logro más importante del nuevo modelo: Lograr un proceso penal célere, respetuoso de la Ley y que devuelve la confianza en las instituciones de justicia penal.

Entre los meses de julio a septiembre de 2006, se han presentado 71 requerimientos fiscales de terminación anticipada del proceso de los cuales un 90 % han concluido en acuerdos aprobados y sentenciados con sentencias aprobatorias, en el 10 % restante no ha habido acuerdo, no se han instalado la audiencias por incomparecencia de los sujetos procesales (imputado, fiscal, o ambos) y en un mínimo porcentaje los jueces emitieron sentencias absolutorias o los acuerdos fueron desaprobados⁷².

⁷² . **Wilber Chávez Torres.** _El proceso de terminación anticipada en el Código Procesal Penal de 2004 (Perú). Trabajo de Internet.

Punto importante de resaltar nos resulta el hecho de que, como expresa el NCPP en su artículo 468, la Terminación Anticipada puede plantearse “... una vez expedida la Disposición Fiscal... y hasta antes de formularse la Acusación Fiscal”⁷³, o dicho en otras palabras, ya iniciada la Investigación Preparatoria.

Sin embargo, en la praxis, en el distrito judicial de Huaura, se ha podido constatar que existen casos en los que, habiéndose formulado la acusación, se ha llegado a un acuerdo de Terminación Anticipada dentro de la Audiencia de Control de la misma. Esto ha causado discrepancias pues unos se adhieren a la interpretación literal del artículo 468 NCPP mientras que otros, al amparo de lo expuesto anteriormente, se consideran abanderados de la posición contraria.

Nuestra posición es la de estar de acuerdo en la aplicación del procedimiento de terminación anticipada aun luego de formulada la acusación fiscal en tanto que aún se encuentra el proceso en una suerte de “**en manos del Fiscal**”; además se debe dejar de lado la interpretación literal de la norma que nos convierte en una suerte de robots incapaces de razonar para convertirnos en operadores del proceso penal capaces de analizar y reconocer cual es el espíritu del NCPP. El espíritu de este es, la búsqueda de un proceso penal célere y respetuoso de la Ley. Al respecto expresamos que los códigos en general y el NCPP en particular son creación humana y por tanto falible y modificable; por tanto es función de los profesionales del derecho contribuir a su modernización y mejora.

El procedimiento de terminación anticipada es una de las herramientas que brinda el NCPP que es tratada dentro de los “Procesos especiales”. Su espíritu es el acortamiento de las etapas del proceso; por tanto, la incoación de la terminación anticipada no conlleva a un resultado dañino sino por el contrario resulta favorable para el proceso penal, logrando cumplirse de esa manera con la tan ansiada **celeridad** de los procesos penales. No encontramos obstáculo alguno para la realización de este mecanismo siendo un aporte el pedido de *modificación del artículo 468 del NCPP* en el sentido de que se permita

⁷³ Artículo. 468°. Apartado 1 del NCPP.

expresamente la realización del procedimiento de terminación anticipada incluso luego de formalizada la acusación fiscal.

Creemos que el texto del numeral 1 del artículo 468 referente al punto en comento se basa en la idea de no otorgar un premio o incentivo (reducción de la pena) a quién activó la maquinaria jurisdiccional al no aceptar la incoación del proceso de terminación anticipada porque creía que podría librarse fácilmente; pero ahora al verse acorralado, prefiere la aplicación de este.

Al respecto creemos que, la iniciación de la Terminación Anticipada constituye, sea antes o después de formalizada la acusación, un mecanismo de simplificación procesal por tanto contribuye con la celeridad del proceso y con la libertad del procesado (que debe ser la regla).

1.2.1. REDUCCIÓN DE LA SEXTA PARTE DE LA PENA:

Respecto de la reducción de la sexta parte de la pena como premio o incentivo otorgado al imputado nos hemos ocupado en capítulos anteriores por lo que ahora basaremos nuestro comentario en lo que sucede en la práctica en el D.J. de Huaura.

Puede ocurrir que, cuando el Fiscal presenta al Juez un Acuerdo Provisional en el que ha practicado la reducción de la pena por confesión, por sexta parte y por atenuantes como responsabilidad restringida o tentativa; el juez solamente aprueba o desaprueba el acuerdo y no practica ninguna reducción. Por otra parte ocurre también, que cuando se presenta el Acuerdo Provisional contemplando la reducción de la pena por atenuantes y confesión, esta resulta ser la base de la pena sobre la que el Juez practica la reducción de la sexta parte; en algunos casos el acuerdo no contempla la reducción de la pena por confesión y sexta parte y el juez es quien practica estas reducciones⁷⁴. No existe, el distrito judicial de Huaura ninguna normativa al

⁷⁴ **Wilber Chávez Torres.** _El proceso de terminación anticipada en el Código Procesal Penal de 2004 (Perú). Trabajo de Internet.

respecto; sin embargo, al amparo de los lineamientos que se deducen del nuevo modelo, los operadores del proceso penal del D.J. de Huaura actúan en pro de la libertad.

2. EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN EL DISTRITO JUDICIAL DE HUAURA.

El principio de Oportunidad constituye un mecanismo de celeridad procesal para el distrito judicial de Huaura en tanto que representa un número elevado de denuncias en los que se ha aplicado. Anteriormente a la aplicación del NCPP el 01 de julio de 2006, el D.J. de Huaura se caracterizaba por contar con un número altísimo de procesos, muchos de los cuales, no deberían serlo. Esto es, que los juzgados penales se sobrecargaban porque no había ningún tipo de filtro.

En concreto, el filtro que resulta la aplicación del Principio de Oportunidad para que solamente lleguen a juicio los casos que tienen mayor complejidad; ha estado presente desde 1991 sin embargo, en la actualidad, se tiene por prioridad – en el D.J en mención – la utilización de estos mecanismo; acorde con el sistema acusatorio.

3. MECANISMOS DE CELERIDAD PROCESAL.

A lo largo del presente trabajo de investigación hemos tratado una serie de puntos que nos sirven para entender lo que es y para qué sirve un **“mecanismo de celeridad procesal”**. Este no es un término o concepto que encontremos en la doctrina (referida al proceso de terminación anticipada y al principio de oportunidad) ni mucho menos en el código penal o en el código procesal penal sino que es el término que utilizamos para efectos de juntar las instituciones que estudiamos en la presente tesis y que entregamos como aporte.

Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, mecanismo significa - en su cuarta acepción - “**proceso**”; esto es, el desarrollo o desenvolvimiento; y celeridad significa prontitud, rapidez, velocidad. Por tanto, “**mecanismos de celeridad**” vienen a ser aquellas herramientas cuyo desarrollo tienen por finalidad acortar las etapas y/o tiempos del proceso penal.

Este es, sin duda alguna, el espíritu de la reforma del proceso penal. El nuevo código trae consigo el respeto a la constitución y a los derechos fundamentales de la persona humana, trae transparencia en el proceso penal y respeto al debido proceso; pero es innegable que lo más resaltante es la **celeridad**; la rapidez en el proceso que recupera la confianza de la población en las instituciones de justicia penal porque los justiciables ven que su proceso no se prolonga indefinidamente sino que se resuelve con prontitud pero sin dejar de lado el respeto a la Ley.

He aquí la esencia del nuevo código procesal penal y lo que su aplicación en el distrito judicial de Huaura ha implicado. No se trata solamente de que el hombre de formación jurídica se dé cuenta que el proceso penal ha mejorado sino que esa mejora debe ser palpable y reconocible por el hombre común.

Estos instrumentos a que hemos llamado mecanismos de celeridad procesal son a todas luces, los medios que deben utilizarlos jueces, fiscales y abogados para obtener pronto resultados. No privilegiar estos mecanismos implica que el ciudadano común (el hombre de la calle) no vea mejoras en el proceso penal moderno y pierda la confianza en las instituciones de justicia y aún más en un estado de Derecho.

4. LOGROS OBTENIDOS CON LA APLICACIÓN DE MECANISMOS DE CELERIDAD PROCESAL EN EL DISTRITO JUDICIAL DE HUAURA.

Los mecanismos de celeridad procesal aplicados en el distrito judicial de Huaura como el proceso de terminación anticipada y el Principio de Oportunidad han dado sin duda alguna muy buenos resultados; estos se manifiestan en la productividad tanto de jueces como de fiscales y abogados defensores; esto es, se ha incrementado el número de casos resueltos y se ha disminuido la carga procesal.

A continuación comentaremos algunos aspectos relevantes.

4.1. CASOS RESUELTOS Y DISMINUCIÓN DE LA CARGA PROCESAL:

Al utilizar mecanismos de celeridad procesal en el distrito judicial de Huaura, lo que se ha logrado es resolver una mayor cantidad de casos en tanto que el tiempo que se ahorra al aplicar Principio de Oportunidad o Terminación Anticipada es utilizado para solucionar otros procesos. Es decir, el número de casos resueltos aumenta en tanto más se apliquen los mecanismos de celeridad. Esta relación inversamente proporcional entre casos en los que se aplican mecanismos de celeridad procesal y carga procesal es un gran logro en la administración de justicia de Huaura y constituye un precedente de observancia obligatorio en la progresiva aplicación del NCPP.

Como mostraremos más adelante, existen una serie de estadísticas que demuestran numéricamente, los beneficios obtenidos con la utilización de de estos mecanismos. Pero ello, lejos de generar una suerte de conformidad, debe causar el impuso de propender aún más a la utilización de estos mecanismos.

4.2. CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES DE JUSTICIA PENAL:

Recobrar la confianza del ciudadano en las instituciones de justicia penal constituye un gran logro producto de la aplicación de los mecanismos de celeridad procesal en tanto que implica que el ciudadano común deje de lado la venganza o justicia a mano propia para confiar la solución de su litis al Estado a través de un tercero llamado juez.

Con la aplicación de los mecanismos de celeridad procesal, el ciudadano observa que los conflictos se resuelven en base al acuerdo entre las partes. Esto es lo que la doctrina ha llamado justicia penal negociada y constituye una herramienta importantísima para que los procesos se desarrollen con celeridad y respeto a la ley, pero eficientemente. Creando de esta manera, confianza en el sistema de justicia penal con lo que se reduce la vendetta.

4.3. RESPECTO DEL DESCONGESTIONAMIENTO DE LOS CENTROS CARCELARIOS:

La aplicación de mecanismos de celeridad procesal evita que en los centros carcelarios campee el hacinamiento. Al respecto expresamos que es conocido que en los centros penitenciarios existen más procesados que sentenciados; pero ello se revierte – como ha ocurrido en el penal de Carquín - con la disminución prudencial de la pena cuando se aplica por ejemplo el proceso de terminación anticipada. De esta manera se evitan largas condenas que se manifiestan en cárceles sobrepobladas.

4.4. RESPECTO DE LA RAPIDEZ DEL PROCESO PENAL:

Como venimos explicando, la aplicación de estos mecanismos implica un acortamiento del tiempo que demora el proceso penal; obviamente los justiciables, el Estado, los operadores del derecho y la sociedad en su conjunto prefieren un proceso con celeridad; cuestión que se encuentra vinculada íntimamente con el principio de economía procesal que evita un gasto innecesario al no dar marcha al aparato jurisdiccional.

Es siguiente cuadro es una pequeña muestra cuantitativa de los beneficios que brinda la aplicación del principio de oportunidad y la terminación anticipada.

DISTRITO JUDICIAL DE HUAURA
CASOS DENUNCIADOS DEL 01/07/2006 AL 04/06/2009

CONCLUSIÓN	CALIFICACIÓN	INVESTIGACIÓN PRELIMINAR	INVESTIGACIÓN PREPARATORIA	ETAPA INTERMEDIA	ETAPA DE JUZGAMIENTO	TOTAL
PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD	249	862		103	38	1252
TERMINACION ANTICIPADA			1077	141		1218

Elaboración: Equipo Técnico de Implementación del NCPP del MP⁷⁵.

5. ANÁLISIS DE LOS INFORMES SOBRE LA APLICACIÓN DEL NCPP:

En la actualidad⁷⁶ existe gran diversidad de información sobre la implementación y aplicación del nuevo código procesal penal, así también sobre los beneficios y logros obtenidos; pero no sobre datos estadísticos. Entre los pocos de los últimos mencionados no existe consenso; por ello, para efectos de la presente Tesis y para ubicarnos en un contexto, haremos referencia a los informes emitidos por las instituciones relacionadas con la aplicación del nuevo código procesal penal, otorgando especial importancia a los informes emitidos por la Fiscalía de Huaura que, como mencionamos anteriormente, ha sido la institución que mas se ha preocupado por lograr una correcta aplicación del nuevo modelo procesal.

⁷⁵ Casos denunciados del 01/07/2006 al 04/06/2010. Elaboración: Equipo Técnico de Implementación del NCPP del MP.

⁷⁶ Enero de 2010.

Nuestros datos y cifras; así como el análisis que realizamos se basan en estos informes. Comenzaremos haciendo referencia al informe de los cien primeros días de aplicación del nuevo código.

El primer informe titulado **“DISTRITO JUDICIAL DE HUAURA. IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. INFORME DE LOS CIENT PRIMEROS DÍAS”** fue preparado por un equipo de trabajo conformado por José Antonio Cornelio Soto (Fiscal Adjunto Superior), Jorge Rosas Yataco (Fiscal Provincial Coordinador de Huaura), Martín Rivas Belotti (Fiscal Provincial Coordinador de Barranca), Alcides Chinchay Castillo (Fiscal Provincial Coordinador de Huaura, José María Sernaqué Nachique (Analista) y supervisado por Félix Ernesto Salazar Huapalla (Fiscal Superior Decano⁷⁷). En ese informe se trata sobre problemas de diversa índole en la aplicación del NCPP y el camino que se debe tomar.

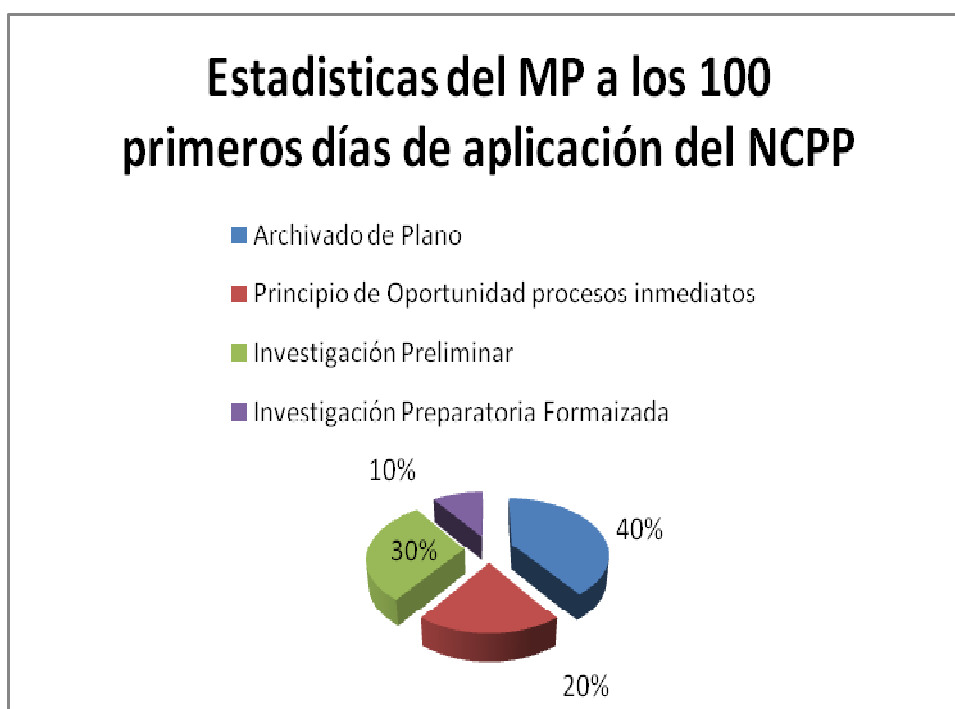
Para efectos de la presente tesis trataremos solamente lo relacionado al proceso especial de terminación anticipada y el principio de oportunidad.

Las estadísticas del MP muestran que del 100% de las audiencias, aproximadamente el 40% se está archivando de plano; *el 20% se está tramitando en mayor medida por Principio de Oportunidad* y en menor medida por procesos inmediatos, y queda un 30% en investigación preliminar y el 10% con investigación preparatoria formalizada. Todo ello indica que el proceso va por buen camino, es decir el grueso de denuncias, o se archiva o se maneja mediante mecanismos alternativos...⁷⁸

⁷⁷ En la actualidad, quien dirige la Fiscalía de Huaura es el doctor Marlon Calle Pajuelo.

⁷⁸ Informe del Ministerio Público de los 100 primeros días de aplicación del NCPP “DISTRITO JUDICIAL DE HUAURA. IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. INFORME DE LOS CIENT PRIMEROS DÍAS” pag. 2.

El siguiente cuadro muestra gráficamente la información del informe de los 100 primeros días de aplicación del nuevo código.



Fuente: Informe del Ministerio Público “DISTRITO JUDICIAL DE HUAURA. IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. INFORME DE LOS CIENTO PRIMEROS DÍAS”

De esta información desprendemos que la Fiscalía del D.J. de Huaura busca depurar los procesos, privilegiando las salidas alternativas, de manera tal que sólo llegue a juicio oral una minoría de casos. Definitivamente, en este primer informe, se hace notar el archivo de plano con un considerable 40% en el que no existe mayor problema. El punto que queremos resaltar es el importante 20% de denuncias en las que se aplicó el Principio de Oportunidad y el proceso inmediato que sumados a los archivos llegan a un 60% importante.

Esto demuestra que el rol que cumple el D.J. de Huaura como inicio de la progresiva aplicación del nuevo código está siendo cumplido a cabalidad y brindando muy buenos resultados. Lo que se logra con ello es descongestionar los despachos de manera que el tiempo que los jueces le dedicaban a estos

procesos, ahora se los dedican a los que tienen especial complejidad. El producto final es un proceso con celeridad.

Un informe posterior expresa que, según las denuncias acumuladas de julio a diciembre de 2006. El 30% fueron archivadas, el 14% se tramitó (...) mediante aplicación del Principio de Oportunidad, el 1% se tramita (...) por el proceso de Terminación Anticipada y el 1% se encuentra en trámite del proceso inmediato. Descontando los archivos y los mecanismos alternativos, a diciembre se tenía que el nivel de Investigaciones preliminares estaba en 43% y la Formalización de la Investigación Preparatoria se encontraba en 9%⁷⁹. Ello demuestra que a pesar de la disposición de los operadores del derecho penal para aplicar medidas de celeridad⁸⁰, ha disminuido el porcentaje de su aplicación. Esto ha sido subsanado con el transcurrir del tiempo, lo que demostramos con los siguientes datos.

Respecto de los informes de los años 2007 y 2008 por ejemplo, tenemos información que corrobora los logros obtenidos con la aplicación del Principio de Oportunidad y el Proceso de Terminación Anticipada por los juzgados de investigación preparatoria de la provincia de Huaura en el periodo Julio 2007 – Junio 2008. Se aprecia que han ingresado a los juzgados de la Investigación Preparatoria, 1,342 procesos nuevos; han ingresado 1,375 requerimientos previa formalización, de los cuales 250 (18%) corresponden a sobreseimientos, 708 (51%) a requerimientos de acusación, 297(22%) a terminaciones anticipadas, 68 (5%) a requerimientos mixtos, 2 (0.001%) a colaboración eficaz, 43 (3%) a procesos inmediatos y 7 (1%) a procesos de seguridad.

Ofrecemos el siguiente cuadro para un mejor entendimiento.

⁷⁹ Informe mensual de situación de implementación del Código Procesal Penal. Diciembre 2006.

⁸⁰ Se entiende por medidas de celeridad: aquellas herramientas brindadas por el NCPP para lograr un proceso penal célere.

Ingresos a los Juzgados de la Investigación Preparatoria de Huaura
Periodo: Julio 2007 – Junio 2008

Total Ingresos		Total Nuevos	Total Adecuados	Total General
COMUNICACIÓN DE FORMALIZACIÓN		732	0	732
REQUERIMIENTOS	Acusación Directa	556	0	556
	SIN Colaboración Eficaz	0	0	0
FORMALIZACIÓN	Proceso Inmediato	53	0	53
	Proceso de Seguridad	0	1	1
	Sobreseimiento	239	11	250
REQUERIMIENTOS	Acusación	672	36	708
PREVIA	Mixto	60	8	68
FORMALIZACIÓN	Colaboración Eficaz	2	0	2
	Proceso Inmediato	43	0	43
	Proceso de Seguridad	7	0	7
	Terminación Anticipada	297	0	297
	Prisiones Preventivas	301	0	302
	Detenciones Preliminares	97	0	97
REQUERIMIENTO	Tercero Civil	39	0	39
INCIDENTES	Actor Civil	113	2	115
	Incautación	23	0	23
	Desalojo Preventivo	6	0	6
	Embargo	10	0	10
	Otros	655	16	671
SUB TOTAL		3905	75	3980
TOTAL		3980		

Fuente: Módulos Penales del Distrito Judicial
Elaboración: Área de Estadística

Del cuadro anterior notamos el número elevado de ingresos en los que se aplicaron procesos especiales. La línea directriz es la aplicación de criterios de oportunidad para lograr el descongestionamiento de la carga procesal. Por ello es que la Fiscalía de Huaura incide en el uso de facultades discrecionales y salidas alternativas.

**FACULTADES DISCRECIONALES Y SALIDAS ALTERNATIVAS. HUAURA,
JULIO 2006 – JUNIO 2008⁸¹**

Facultad discrecional(archivo)	Salidas Alternativas		
	Principio de Oportunidad	Acuerdos Reparatorios	Sobreseimientos
6392	561	101	368
68,64%	6,02%	1,08%	4,14%

Elaboración a partir de datos contenidos en el Informe del segundo año de vigencia del CPP en Huaura, formulado por la Fiscalía Superior del distrito judicial de Huaura, 2008.

También tenemos información respecto del consolidado de la producción de los juzgados de investigación preparatoria en el distrito judicial de Huaura(no solamente en la provincia de Huaura), la misma que a continuación se detalla: Los Juzgados de la Investigación Preparatoria han resuelto 2,599 casos (producción de requerimientos que ponen fin al proceso), debiendo señalar que 50(2%) corresponden a principios de oportunidad, 759 (29%) a sobreseimientos, 736(28%) a terminaciones anticipadas, 66 (3%) a procesos inmediatos con autos admitidos y 988 (38%) a autos de enjuiciamiento. Para un mejor entendimiento ofrecemos el siguiente cuadro.

⁸¹ La Reforma Procesal Penal en Perú. Avances y desafíos a partir de las experiencias en Huaura y La Libertad. Nataly Ponce Chauca. Consultora, responsable del estudio.
17 de diciembre de 2008
Lima, Perú

**CONSOLIDADO DE PRODUCCIÓN DE LOS JUZGADOS DE
INVESTIGACIÓN PREPARATORIA PERIODO JULIO 2007- JUNIO 2008.**

INVESTIGACIÓN PRODUCCIÓN		TOTAL NUEVOS	TOTAL ADECUADOS	TOTAL GENERAL
PRINCIPIO DE	Definitivo	29	1	30
	Oportunidad			
	Suspensión del procedimiento	20	0	20
SOBRESEIMIENTO		522	237	759
TERMINACIÓN ANTICIPADA	E. Investigación	445	5	450
	E. Intermedia	264	22	286
COLABORACIÓN EFICAZ	Exención de la pena	0	0	0
	suspensión de la ejecución de la pena	0	0	0
	disminución de la pena	0	0	0
PROCESO INMEDIATO	auto admitido	66	0	66
EJECUCIÓN DE SENTENCIA	revoca. De la susp. De la ejecución de la pena	4	1	5
	revocación de la reserva del fallo	0	0	0
	ejecutados y archivados	13	5	18
	otros	10	0	10
AUTOS DE ENJUICIAMIENTO		692	296	988
SUB TOTAL		2065	567	2632
TOTAL			2632	

CAPITULO IV

ANÁLISIS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MECANISMOS DE CELERIDAD PROCESAL: TERMINACIÓN ANTICIPADA Y PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN EL DISTRITO JUDICIAL DE HUAURA

Sin duda alguna la aplicación de mecanismos de celeridad procesal (Principio de Oportunidad y Terminación Anticipada) en el distrito judicial de Huaura ha mostrado muy buenos resultados. Con la utilización de estas herramientas se ha logrado aminorar en gran medida la carga procesal y ello conduce a la realización de los procesos con celeridad. A su vez, la celeridad devuelve la confianza de los ciudadanos en las instituciones de justicia penal.

La idea es *“El trabajo de los operadores del proceso penal: jueces, fiscales y abogados; para el ciudadano y no al contrario”*. Por ello, en el distrito judicial de Huaura se apuesta por la libertad como la regla utilizando las medidas de celeridad. Sin embargo existe un grupo de críticos que cuentan con una serie de argumentos en contra de estos mecanismos como por ejemplo el que la aplicación de estas herramientas significa la desnaturalización del proceso penal en tanto que no se cumplen todas las etapas del proceso o porque se acortan las mismas.

A continuación expondremos algunos argumentos puntuales de aquellos críticos y expresaremos nuestro punto de vista.

1. CRITICA A LOS MECANISMOS DE CELERIDAD PROCESAL:

1.1. VULNERACIÓN AL DERECHO DE DEFENSA:

Esta posición expresa que la aplicación del mecanismo de celeridad procesal⁸² o el procedimiento especial⁸³ de terminación anticipada vulnera el

⁸² El término mecanismo de celeridad procesal es introducido a manera de aporte para efectos de la presente tesis haciendo resaltar el papel fundamental que cumplen los mecanismos en él inmersos, en la CELERIDAD del proceso penal moderno.

derecho de defensa en tanto que *la imposición de una condena supone el rompimiento de la presunción de inocencia, para lo cual necesariamente el pronunciamiento debe sustentarse en prueba válida, la cuál únicamente se genera en juicio oral sometido a la publicidad, inmediación y contradicción; motivo por el cual se estaría vulnerando el derecho de defensa al momento de emitir sentencia condenatoria sin actividad probatoria*⁸⁴.

- NUESTRO PUNTO DE VISTA:

Respecto de lo comentado líneas antes expresamos que el derecho de defensa supone uno de los derechos fundamentales de toda persona y que toma especial importancia en el proceso penal, en tanto que es una garantía fundamental que tiene por finalidad proteger a toda persona inculpada de la comisión de un delito. El derecho de defensa lleva inmersa una bifurcación que a saber muestra dos aspectos: El primero de ellos conocido como la autodefensa o defensa material que es aquella que ejerce el propio imputado sin la intervención de su abogado y el segundo que es la defensa técnico – jurídica, que es el asesoramiento que recibe el imputado por parte de su abogado defensor sea este el de su elección o el que el Estado le proporciona⁸⁵. Atendiendo a estas consideraciones expresamos que contrariamente a la postura analizada, la aplicación del proceso de terminación anticipada no constituye vulneración alguna al derecho de defensa sino que en él se ejerce plenamente. Al momento de la celebración de la audiencia, el acusado es **consultado** sobre la aceptación en su totalidad o en parte de los cargos formulados en su contra; (defensa material; siendo importante por otro lado destacar que también se exige la **presencia obligatoria de su abogado defensor** que es la llamada defensa técnica y que ambos(imputado y abogado) tienen que manifestar su conformidad con la aplicación de dicho procedimiento especial, situación que también concurre cuando se presenta el acuerdo preliminar de terminación anticipada, el cual

⁸³ Nombre jurídico con el que se refiere a las herramientas brindadas por el NCPP en su libro quinto.

⁸⁴ Artículo en internet: ALGUNOS PROBLEMAS EN LA APLICACIÓN DEL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA *Julio César Tapia Cárdenas .Fiscal Adjunto al Provincial Penal Provisional*

⁸⁵ artículo IX del Título Preliminar NCPP.

requiere la suscripción de la defensa como del imputado y que no concreta ninguna vulneración del derecho de defensa sino que hace gala de él.

1.2. VULNERACIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA:

Esta postura expresa que el proceso de terminación anticipada vulnera al derecho a la presunción de inocencia al amparo de la ausencia de actividad probatoria en su substanciación, vale decir, que la carencia de actividad probatoria contravendría la presunción de inocencia al condenar al imputado sin la misma.

- NUESTRO PUNTO DE VISTA:

Respecto de lo expuesto expresamos que en el proceso de terminación anticipada el imputado hace renuncia al juicio a fin de que su situación se resuelva con celeridad y así obtener además el beneficio en la rebaja de la condena. Debemos tener en cuenta que el juez dicta sentencia condenatoria sobre la base de los **elementos de convicción suficientes** que se hayan incorporado legítimamente a la investigación⁸⁶.

Por tanto la aplicación del proceso de Terminación Anticipada, no vulnera la presunción de inocencia en tanto que implica por un lado la renuncia al desarrollo de la totalidad de las etapas del proceso penal y por otro lado que la sentencia condenatoria no está basada en un criterio irracional sino que tiene el amparo que brindan los elementos de convicción suficientes además de tener en cuenta que para la realización de este mecanismo de celeridad procesal se debe cumplir cualquiera de los supuestos expresados para la realización del proceso inmediato⁸⁷.

⁸⁶ Numeral 6) del artículo 468° del NCPP.

⁸⁷ Cuando el imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito, cuando el imputado ha confesado la comisión del delito y cuando los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares, y previo interrogatorio del imputado, sean evidentes.

1.3. DISMINUCIÓN DE LAS ETAPAS DEL PROCESO PENAL:

Esta postura expresa que la disminución de las etapas del proceso penal moderno supone una vulneración a la esencia del mismo en tanto que lo desnaturaliza y lo convierte en una suerte de deformación del sistema procesal penal.

- NUESTRO PUNTO DE VISTA:

Atendiendo a estas consideraciones y contrarrestando las críticas a la institución en comento expresamos que, no podemos, ni queremos negar, que con la aplicación de estos mecanismos se acorten los tiempos del proceso penal pues esta es la esencia misma del nuevo modelo.

En primer término se trata de **herramientas brindadas por el mismo código**, vale decir, no se ataca la ley sino que ella misma brinda la herramienta que permite el acortamiento de las etapas del proceso penal.

Tampoco constituye perjuicio para el proceso ni para las partes sino que por el contrario **favorece un proceso con celeridad y seguridad** en tanto que estos mecanismos se aplican en supuestos en los que se tiene certeza de la comisión del ilícito haciendo fácil el acuerdo y no vulnerando el derecho de defensa ni la presunción de inocencia.

2. APORTES:

2.1. TÉRMINO “MECANISMOS DE CELERIDAD PROCESAL”:

Al amparo de que es facultad y obligación de los hombres de formación jurídica, contribuir con el desarrollo del derecho haciendo notar los errores, realizando sanas críticas y brindando aportes; respetuosamente utilizamos el nombre de mecanismos de celeridad procesal para agrupar a aquellas instituciones o herramientas que brinda el NCPP para lograr el acortamiento de

las etapas del proceso penal y obtener como resultado un proceso penal célere pero con apego a la ley. Si bien esta terminología no ha sido utilizada con anterioridad, la exponemos como contribución al derecho moderno.

2.2. MODIFICACIÓN DEL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 468 NCPP SOBRE NORMAS DE APLICACIÓN DEL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA:

El artículo 468 NCPP, expresa que *los procesos podrán terminar anticipadamente, observando las siguientes reglas:* (en su numeral 1) A iniciativa del Fiscal o del Imputado, el Juez de la Investigación Preparatoria dispondrá, una vez expedida la Disposición Fiscal del artículo 336 y *hasta antes de formularse acusación fiscal*, pero por una sola vez, la celebración de la audiencia de terminación anticipada, de carácter privada (...)

Resaltamos “*hasta antes de formularse acusación fiscal*”, porque creemos que el espíritu del nuevo sistema es la solución del proceso penal privilegiando la utilización de las medidas de celeridad procesal para lograr un proceso célere pero respetuoso de la ley. Esto implica, a nuestro entender, dejar de lado la literalidad en la aplicación de la norma privilegiando por el contrario el análisis y el razonamiento siempre que no se perjudique la libertad del imputado⁸⁸. Por otro lado es obligación de los hombres y mujeres de formación jurídica, realizar aportes que contribuyan al derecho para lograr un mejor proceso penal y al amparo de ello, respetuosamente, expresamos como aporte el pedido de modificación del numeral 1 del artículo 468 NCPP en el sentido de que la prohibición de la incoación del proceso de Terminación Anticipada luego de formularse la acusación fiscal no refleja, a nuestro entender, el espíritu inmerso en el NCPP. Permitir esta aplicación – que de hecho se hace por algunos fiscales en el distrito judicial de Huaura – resulta favorable porque contribuiría aun más con la realización de mecanismos de celeridad procesal que acortan las etapas del proceso penal moderno

⁸⁸ El artículo VII del Título Preliminar NCPP en su numeral 3 expresa que (...) La interpretación extensiva y la analogía quedan prohibidas mientras no favorezcan la libertad del imputado o el ejercicio de su derecho.

favoreciendo el descongestionamiento de los despachos judiciales y de los centros carcelarios, el descongestionamiento de la carga fiscal, evita activar la maquinaria jurisdiccional ociosamente y recobra la confianza de los ciudadanos en la justicia penal moderna.

En la práctica (en el distrito judicial de Huaura), se ha podido constatar que existen casos en los cuales, habiéndose ya formulado la acusación, se puede llegar a un acuerdo de Terminación Anticipada dentro de la Audiencia de Control de la misma, aplicando Criterio de Oportunidad. En tal sentido, encontramos en la jurisprudencia de Huaura dada por la Primera Sala de Investigación Preparatoria, una fundamentación para la utilización de este criterio, señalando que, se puede instalar la aplicación de un Criterio de Oportunidad, que conforme a otros pronunciamientos en procesos distintos expedidos por ese Juzgado, lo ha interpretado como la posibilidad de aplicar por última vez o el principio de oportunidad o la Terminación Anticipada según fuere el caso, siendo ello así, sí es posible aplicar la Terminación Anticipada en esta etapa aún cuando las normas especiales de este instituto procesal, regulados en el Artículo 468 y siguientes del Código Procesal Penal, prevén que no debe haber acusación, pero deberá aplicarse lo dispuesto en el artículo VII, numeral Cuarto del Título Preliminar del precitado Código en el que se prevé que se debe aplicar la ley más favorable al procesado⁸⁹

Por tanto, si el legislador modifica el numeral 1 del artículo 468 NCPP estaría contribuyendo a que los operadores del derecho penal respetuosos de la literalidad de la norma, apliquen sin ningún problema esta herramienta de celeridad.

Entendemos que la idea del legislador ha sido la de otorgar el beneficio de la reducción de la sexta parte de la condena al procesado que coadyuva a que la maquinaria jurisdiccional no se active; pues de ser así, no tendría sentido aparente. Sin embargo, nuestra opinión, es que tenemos que tener una

⁸⁹ Trabajo en internet: TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN DE ACUERDOS EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL: ESPECIAL REFERENCIA A LOS ACUERDOS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA. Ángel Fernando Ugaz Zegarra (Abogado por la UNMSM. Socio del Estudio Larriau & Larriau Abogados Asociados. Miembro del INCIPP. Profesor de la Academia de la Magistratura).

visión amplia y no circunscribirnos a un solo criterio sino que debemos ver “más allá” y al amparo de ello ver que lo más importante es “la libertad”; Por ella debemos luchar y por ella debemos permitir la aplicación del proceso de terminación anticipada aún luego de formalizada la acusación de manera tal que el procesado se vea libre de un proceso en el menor tiempo posible.

Por tanto, creemos que esta modificación solamente puede traer consecuencias favorables en tanto que coadyuva ala realización de un proceso penal respetuoso de la libertad y célere.

2.3. CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA:

El artículo 468 NCPP, también expresa en su numeral 1 que *los procesos podrán terminar anticipadamente cuando por* iniciativa del Fiscal o del Imputado, el Juez de la Investigación Preparatoria disponga, una vez expedida la Disposición Fiscal del artículo 336 y hasta antes de formularse acusación fiscal, “*pero por una sola vez*”, la celebración de la audiencia de terminación anticipada, de carácter privada (...).

Creemos que un aporte valioso sería, la modificación del numeral 1 del artículo 468° del NCPP respecto de las veces en que puede hacerse uso del proceso especial de Terminación Anticipada. Nuestra postura es que puede permitirse por más de una vez la celebración de la audiencia de terminación anticipada pero sin caer en el exceso de permitir que se requiera su aplicación cuantas veces lo deseen las partes. Regular ello es tarea propia del legislador; que creemos debe hacer en pro de que el procesado pueda acceder a los beneficios del proceso de Terminación Anticipada y se realice un proceso con celeridad.

2.4. CARÁCTER PRIVADO DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA:

El artículo 468 NCPP en su numeral 1 expresa respecto de la celebración de la audiencia de terminación anticipada que (...) la misma es de carácter privada (...). Creemos que debe modificarse el artículo en comento a fin de lograr la publicidad de la audiencia de Terminación Anticipada. Ello significaría contribuir con un proceso penal moderno, de corte acusatorio y respetuoso de los principios que ello implica, entre ellos, el de publicidad, al amparo de los –ya mencionados- beneficios que acarrea.

La publicidad de la audiencia de Terminación Anticipada contribuiría sin lugar a duda, a que el ciudadano común tome conocimiento de esta herramienta importantísima que venimos propugnando. Por tanto, creemos que es una contradicción, privilegiar la utilización de este mecanismo de celeridad y evita el conocimiento del mismo por parte de los ciudadanos.

3. CONCLUSIONES

3.1. RESPECTO DE LA REFORMA DEL PROCESO PENAL Y LA IMPLEMENTACIÓN EL NCPP:

La reforma del proceso penal no es “*per se*” la implementación del NCPP sino que ésta es una parte de aquella en tanto que la reforma implica un cambio en la manera de pensar y actuar. En este sentido la reforma del proceso penal se verá concretada luego de concluida la implementación progresiva del NCPP en todo el territorio del Perú y tras años de vivir en el desarrollo del nuevo sistema procesal penal dejando de lado un sistema inquisitivo que implica la vulneración de los derechos fundamentales.

La implementación del NCPP que se inició en el distrito judicial de Huaura el 1 de julio de 2006 ha dado muy buenos resultados en tanto que este distrito judicial no tiene mayor complejidad en cuanto a delitos se refiere; sin embargo, cuando culmine esta progresiva implementación en el distrito judicial de Lima sin duda alguna nos enfrentaremos a una mayor complejidad de los delitos como a un sin número de problemas al amparo de la extensión territorial de este distrito judicial y la falta de preparación en el manejo del NCPP como al desconocimiento del mismo; lo que hace imperiosa la necesidad de que los operadores que participan del proceso penal se actualicen en cuanto al conocimiento de las instituciones nuevas que trae consigo el NCPP como también que desarrollen destrezas para su aplicación. Al amparo de esto es que nos atrevemos a realizar el presente trabajo de investigación y contribuir con algunas opiniones y aportes.

Debe darse un cambio de mentalidades insoslayablemente para la realización de la nueva justicia procesal penal; la misma que debe tener como base – tomando como espejo al distrito judicial de Huaura – a operadores del derecho capaces de afrontar cambios y asumir nuevos retos en pro de lograr una justicia penal célere y respetuosa de los derechos fundamentales.

3.2. RESPECTO DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL:

El nuevo código procesal penal es un código moderno que contiene una serie de mecanismos como los que tratamos en el presente trabajo de investigación para el mejor desarrollo del proceso; es a decir de muchos, un código excelente; sin embargo, no por eso deja de ser creación humana; lo que implica que debemos contribuir con aportes para lograr un mejor proceso penal.

Sin embargo, no podemos dejar de mencionar el invaluable aporte del NCPP que es la unificación en un solo cuerpo normativo de la legislación procesal penal bajo la dirección de un único sistema: el acusatorio. Esto implica el medio necesario para el correcto funcionamiento de un sistema penal moderno.

3.3. RESPECTO DE LOS MECANISMOS DE CELERIDAD PROCESAL:

Los mecanismos de celeridad procesal constituyen herramientas brindadas por el NCPP para lograr un proceso penal célere y respetuoso de las garantías y principios que inspiran un sistema acusatorio garantista. Su aplicación en el distrito judicial de Huaura ha dado a todas luces muy buenos resultados que se ven reflejados en la disminución de la carga procesal, en el descongestionamiento del penal de Carquín y ha demostrado sobretodo que los ciudadanos pueden confiar en el nuevo sistema penal; por ello su aplicación debe privilegiarse en todos los distritos judiciales.

Los mecanismos de celeridad son una alternativa para el correcto funcionamiento del sistema procesal penal; siendo para ello indispensable la preparación de los operadores del proceso penal; debiendo para ello estar en continua actualización.

3.4. RESPECTO DE LOS APORTES:

Consideramos que los aportes que proporcionamos a la comunidad jurídica mediante el presente trabajo de investigación, como son, el término “mecanismos de celeridad” y el pedido de modificación de numeral 1 del artículo 468 NCPP respecto a que se permita la incoación del proceso de terminación anticipada luego de formalizada la acusación, respecto de la publicidad de la audiencia de la misma, y que se permita la realización de la terminación anticipada mas de una vez; constituyen puntos de vista que no deben pasar desapercibidos sino que deben ser materia de análisis por parte de la doctrina. Creemos que el término **mecanismos de celeridad** no constituye error de ningún tipo sino que es un nombre apropiado que podría incluso agrupar otras instituciones aunque para ello se requiere de un mayor estudio.

Por otro lado consideramos que la modificación del artículo 468 en el extremo que se refiere a que se permita la incoación del proceso de terminación anticipada, aún luego de que el fiscal haya formalizado acusación constituye sin lugar a duda seguir el camino que plasma el nuevo modelo procesal penal además de responder a la voz de la sociedad, esto es, que no encontramos razón lógica para tal prohibición sino que por el contrario creemos que la modificación en mención beneficiaría al ciudadano común como a los operadores del derecho y a la sociedad en general en tanto que se logrará la solución del conflicto con eficiencia y eficacia.

BIBLIOGRAFÍA:

1. LIBROS:

- ❖ Víctor CUBAS VILLANUEVA, EL NUEVO PROCESO PENAL; Palestra Editores; Lima 2005.
- ❖ Pepe MELGAREJO BARRETO; EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL. Jurista Editores; 2006.
- ❖ Pedro Miguel ANGULO ARANA, EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN EL PERÚ; Palestra 2004.
- ❖ PEÑA CABRERA FREYRE; TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO; Jurista; 2003.
- ❖ Comisión Andina de Juristas; LA INDEPENDENCIA Y RESPONSABILIDAD DE JUECES, ABOGADOS Y FISCALES; Ginebra, Suiza, 2005.
- ❖ César LANDA ARROYO, JUSTICIA CONSTITUCIONAL; año II, N° 3, ENERO-JUNIO, Lima, 2006.
- ❖ Víctor CUBAS VILLANUEVA; EL PROCESO PENAL; Palestra Editores; Lima-2006; sexta edición.
- ❖ Pablo SANCHEZ VELARDE; INTRODUCCIÓN AL NUEVO PROCESO PENAL; IDEMSA; reimpresión marzo 2006
- ❖ **METODOLOGIA:** Jacobo PEREZ ESCOBAR; METODOLOGIA Y TECNICA DE LA INVESTIGACION JURIDICA; Temis 1999 tercera edición.

2. REVISTAS:

- ❖ LA APLICACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL EN HUAURA. Una experiencia positiva. Justicia Viva. 2008.
- ❖ VISTA FISCAL; año III-N° 3 Lima, Septiembre de 2005.
- ❖ VISTA FISCAL ;año I-N° 1 Lima, Noviembre de 2003
- ❖ Ministerio Público Fiscalía de la Nación; PROPUESTA DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL; Lima, abril de 2005.

- ❖ Comisión Especial de la Implementación del Código Procesal Penal; PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL; Lima, octubre de 2005.
- ❖ Coordinadora Nacional de Derechos Humanos: RETOS DE LA JUDICIALIZACIÓN N° 1 Julio de 2003.
- ❖ Coordinadora Nacional de Derechos Humanos: RETOS DE LA JUDICIALIZACIÓN N° 2 Abril de 2005.
- ❖ XVIII CONGRESO PANAMERICANO DE DERECHO PROCESAL: MEDIOS PROBATORIOS; Octubre de 2005.
- ❖ DIPLOMADO INTERNACIONAL EN DERECHO PROCESAL PENAL; Material de enseñanza; 2007.

3. OTROS:

- ❖ INFORMES PERIODICOS DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL DISTRITO JUDICIAL DE HUAURA CON SEDE EN HUACHO DIRIGIDO A LA FISCALÍA DE LA NACIÓN.
- ❖ ACUERDO PLENARIO N° 5-2008/CJ-116
- ❖ EXPEDIENTE N° 06179-2009-0-1706-JR-PE-01 DEL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ. CHICLAYO.
- ❖ MATERIAL DE ENSEÑANZAS-PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU; LAS GARANTIAS DEL DEBIDO PROCESO; 1996.
- ❖ MATERIAL DEL SEMINARIO: MINISTERIO PUBLICO-FISCALIA DE LA NACION: UN NUEVO PROCESO PENAL PARA EL DISTRITO JUDICIAL DE LA LIBERTAD; 01 DE Abril de 2007
- ❖ ARTÍCULOS DE INTERNET Y FAVORITOS DE BIBLIOTECA DE LA ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA.
- ❖ CÓDIGO PROCESAL PENAL 2004.
- ❖ CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ.

BIBLIOGRAFÍA:

1. LIBROS:

- ❖ Víctor CUBAS VILLANUEVA, EL NUEVO PROCESO PENAL; Palestra Editores; Lima 2005.
- ❖ Pepe MELGAREJO BARRETO; EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL. Jurista Editores; 2006.
- ❖ Pedro Miguel ANGULO ARANA, EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN EL PERÚ; Palestra 2004.
- ❖ PEÑA CABRERA FREYRE; TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO; Jurista; 2003.
- ❖ Comisión Andina de Juristas; LA INDEPENDENCIA Y RESPONSABILIDAD DE JUECES, ABOGADOS Y FISCALES; Ginebra, Suiza, 2005.
- ❖ César LANDA ARROYO, JUSTICIA CONSTITUCIONAL; año II, N° 3, ENERO-JUNIO, Lima, 2006.
- ❖ Víctor CUBAS VILLANUEVA; EL PROCESO PENAL; Palestra Editores; Lima-2006; sexta edición.
- ❖ Pablo SANCHEZ VELARDE; INTRODUCCIÓN AL NUEVO PROCESO PENAL; IDEMSA; reimpresión marzo 2006
- ❖ **METODOLOGIA:** Jacobo PEREZ ESCOBAR; METODOLOGIA Y TECNICA DE LA INVESTIGACION JURIDICA; Temis 1999 tercera edición.

2. REVISTAS:

- ❖ LA APLICACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL EN HUAURA. Una experiencia positiva. Justicia Viva. 2008.
- ❖ VISTA FISCAL; año III-N° 3 Lima, Septiembre de 2005.
- ❖ VISTA FISCAL ;año I-N° 1 Lima, Noviembre de 2003
- ❖ Ministerio Público Fiscalía de la Nación; PROPUESTA DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL; Lima, abril de 2005.

- ❖ Comisión Especial de la Implementación del Código Procesal Penal; PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL; Lima, octubre de 2005.
- ❖ Coordinadora Nacional de Derechos Humanos: RETOS DE LA JUDICIALIZACIÓN N° 1 Julio de 2003.
- ❖ Coordinadora Nacional de Derechos Humanos: RETOS DE LA JUDICIALIZACIÓN N° 2 Abril de 2005.
- ❖ XVIII CONGRESO PANAMERICANO DE DERECHO PROCESAL: MEDIOS PROBATORIOS; Octubre de 2005.
- ❖ DIPLOMADO INTERNACIONAL EN DERECHO PROCESAL PENAL; Material de enseñanza; 2007.

3. **OTROS:**

- ❖ INFORMES PERIODICOS DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL DISTRITO JUDICIAL DE HUAURA CON SEDE EN HUACHO DIRIGIDO A LA FISCALÍA DE LA NACIÓN.
- ❖ ACUERDO PLENARIO N° 5-2008/CJ-116
- ❖ EXPEDIENTE N° 06179-2009-0-1706-JR-PE-01 DEL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ. CHICLAYO.
- ❖ MATERIAL DE ENSEÑANZAS-PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU; LAS GARANTIAS DEL DEBIDO PROCESO; 1996.
- ❖ MATERIAL DEL SEMINARIO: MINISTERIO PUBLICO-FISCALIA DE LA NACION: UN NUEVO PROCESO PENAL PARA EL DISTRITO JUDICIAL DE LA LIBERTAD; 01 DE Abril de 2007
- ❖ ARTÍCULOS DE INTERNET Y FAVORITOS DE BIBLIOTECA DE LA ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA.
- ❖ CÓDIGO PROCESAL PENAL 2004.
- ❖ CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ.



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

V PLENO JURISDICCIONAL DE LAS SALAS PENALES PERMANENTE Y TRANSITORIAS

ACUERDO PLENARIO N° 5-2008/CJ-116

FUNDAMENTO: ARTÍCULO 116° TUO LOPJ
ASUNTO: PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA:
ASPECTOS ESENCIALES

Lima, trece de noviembre de dos mil nueve.-

Los Jueces Supremos de lo Penal, integrantes de las Salas Penales Permanente y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la República, reunidas en Pleno Jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, han pronunciado el siguiente:

ACUERDO PLENARIO

I. ANTECEDENTES

1°. Las Salas Penales Permanente y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la República, con la autorización del Presidente del Poder Judicial, mediante Resolución Administrativa número 221-2009-P-PJ, del 5 de agosto de 2009, con el apoyo del Centro de Investigaciones Judiciales, acordaron realizar el V Pleno Jurisdiccional de los Jueces Supremos de lo Penal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 116° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial –en adelante, LOPJ-, y dictar Acuerdos Plenarios para concordar la jurisprudencia penal.

2°. Para estos efectos se realizaron varios encuentros previos con los Secretarios, Relatores y Secretarios de Confianza de las Salas de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia y tres reuniones preparatorias sucesivas con los señores Jueces Supremos de lo Penal a fin de delimitar el ámbito de las materias que debían abordarse, luego de una previa revisión de los asuntos jurisdiccionales a su cargo y de una atenta valoración de las preocupaciones de la judicatura nacional. Con el concurso de la Secretaría Técnica, luego de los debates correspondientes, se estableció el día de la fecha para la realización del V Pleno Jurisdiccional Penal, aprobado por Resolución Administrativa número 286-2009-P-PJ, del 12 de octubre de 2009, y se definieron los temas, de derecho penal y procesal penal, que integrarían el objeto de los Acuerdos Plenarios. De igual manera se designó a los señores Jueces Supremos encargados de preparar las bases de la discusión de cada punto sometido a deliberación y de elaborar el proyecto de decisión. Además, se estableció que el Juez Supremo designado sería el ponente del tema respectivo en la sesión plenaria y encargado de redactar el Acuerdo Plenario correspondiente.

3°. En el presente caso, el Pleno decidió tomar como referencia las distintas resoluciones de los Tribunales Superiores y Ejecutorias Supremas que analizan y

deciden sobre diversos aspectos del proceso especial de terminación anticipada. En concreto, sobre su viabilidad en la etapa intermedia del proceso común u ordinario, la posibilidad de emitir sentencia absolutoria a pesar de existir un acuerdo entre las partes, los criterios para determinar la aplicación del beneficio de rebaja de un sexto sobre la pena, los alcances de la aplicación de la atenuación excepcional por confesión sincera, y la procedencia y alcances, en su caso, de la apelación del auto que desaprueba el acuerdo de terminación anticipada y de la sentencia anticipada.

4°. En cumplimiento de lo debatido y acordado en las reuniones preparatorias se determinó que en la sesión plenaria se procedería conforme a lo dispuesto en el artículo 116° de la LOPJ, que, en esencia, faculta a las Salas Especializadas del Poder Judicial dictar Acuerdos Plenarios con la finalidad de concordar jurisprudencia de su especialidad. En atención a la complejidad y singulares características del tema abordado, que rebasa los aspectos tratados en las diversas Ejecutorias Supremas que se invocaron como base de la discusión, se decidió redactar el presente Acuerdo Plenario e incorporar con la amplitud necesaria los fundamentos jurídicos correspondientes para configurar una doctrina legal que responda a las preocupaciones anteriormente expuestas. Asimismo, se resolvió decretar su carácter de precedente vinculante, en concordancia con la función de unificación jurisprudencial que le corresponde a la Corte Suprema de Justicia como cabeza y máxima instancia jurisdiccional del Poder Judicial.

5°. La deliberación y votación se realizó el día de la fecha. Como resultado del debate y en virtud de la votación efectuada, por unanimidad, se emitió el presente Acuerdo Plenario. Se ratificó como ponente al señor NEYRA FLORES, quien, con la intervención del señor SAN MARTÍN CASTRO, expresa el parecer del Pleno.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

§ 1. Naturaleza jurídica del proceso de terminación anticipada.

6°. La terminación anticipada es un proceso penal especial y, además, una forma de simplificación procesal, que se sustenta en el principio del consenso. Es, además, uno de los exponentes de la justicia penal negociada. Su regulación, en sus aspectos esenciales, está suficientemente desarrollada en el Libro V, Sección V, artículos 468°/471°, del Nuevo Código Procesal Penal –en adelante, NCPP-. Frente al proceso común del NCPP y el ordinario e incluso el sumario del antiguo sistema procesal penal, que sigue las pautas del antiguo Código de Procedimientos Penales –en adelante, ACPP-, se erige en un proceso penal autónomo, no es una mera incidencia o un proceso auxiliar dependiente de aquél.

Por tanto, la regla hermenéutica que es del caso utilizar será aquella que establece la aplicación supletoria del proceso común u ordinario siempre que exista un vacío normativo, en tanto en cuanto la norma objeto de integración jurídica no vulnere los principios que sustentan el proceso de terminación anticipada o las disposiciones y su estructura procesal.

§ 2. El tratamiento legal del proceso de terminación anticipada en el NCPP.

7°. El proceso de terminación anticipada importa la aceptación de responsabilidad por parte del imputado respecto del hecho punible objeto del proceso penal y la posibilidad de negociación acerca de las circunstancias del hecho punible, la pena, la reparación civil y las consecuencias accesorias. Así fluye de lo dispuesto en el artículo 468°. 4 y 5 NCPP. Al haberse regulado para todo tipo de delitos –ámbito de aplicación general- y sometido sus reglas a una pauta unitaria, es obvio que, por razones de coherencia normativa y de primacía de la ley posterior que reemplaza un instituto legal determinado, las disposiciones del NCPP han venido a reemplazar a las disposiciones procesales penales especiales, tales como las Leyes número 26320 y 28008. Sin embargo, en el caso de los delitos aduaneros –Ley número 28008-, las normas de contenido relevantemente penal material y las reglas procesales específicas vinculadas a las primeras y al modo cómo se han regulado estos delitos siguen rigiendo, tal es el caso de los literales c), d) y e), y los cinco párrafos finales del artículo 20°.

8°. El proceso de terminación anticipada atraviesa diversas etapas o fases, que va desde la calificación de la solicitud de terminación anticipada –sin que para ello o para la continuación del referido proceso corresponda realizar diligencia preliminar alguna o tomar una declaración al imputado- [fase inicial], hasta la realización de la audiencia respectiva [fase principal] y la consecuente emisión de la decisión resolutoria correspondiente: auto desaprobatario del acuerdo o sentencia anticipada [fase decisoria]. Es claro, por lo demás, que audiencia preparatoria es privada, cuya justificación estriba en que es consecuencia del carácter de publicidad relativa de la investigación preparatoria y constituye, desde la perspectiva del imputado, uno de los efectos benéficos de este proceso especial, quien apunta a que su caso no se ventile públicamente.

Es condición de la realización de la citada audiencia que la solicitud de terminación anticipada pase el examen judicial de admisibilidad y procedencia. Además, el Juez ha de revisar si el imputado tiene debido conocimiento de los alcances y consecuencia del acuerdo al que puede llegar –es, precisamente, el segundo paso de la audiencia, inmediatamente después de la presentación de los cargos por la Fiscalía-. El consentimiento del imputado, visto el carácter dispositivo de la pretensión o los efectos que entraña, ha de ser libre, voluntario –sin presiones o amenazas-, informado, prestado con el auxilio de un abogado defensor, y con pleno conocimiento de lo que hace o deja de hacer y a lo que se somete una vez que acepta el acuerdo.

9°. Si es que las partes arriban a un acuerdo –que tiene como presupuesto la afirmación de la responsabilidad penal del imputado y, como condición, la precisión de las consecuencias jurídico penales y civiles correspondientes, en perfecta armonía con el principio de legalidad-, corresponde al Juez en ejercicio de su potestad jurisdiccional llevar a cabo los pertinentes controles acerca de la legalidad del acuerdo y de la razonabilidad de la pena.

10°. El control de legalidad del acuerdo se expresa en tres planos diferentes:

- A. El ámbito de la tipicidad o calificación jurídico penal, en relación a los hechos objeto de la causa y a las circunstancias que rodean al hecho punible.

- B. El ámbito de la legalidad de la pena y, en su caso, a su correspondencia con los parámetros, mínimo y máximo, que fluyen del tipo legal aplicado y de las circunstancias modificativas de la responsabilidad –esto es lo que se denomina ‘pena básica’-. También el juicio de legalidad alcanza al respeto de los ámbitos legalmente definidos de la reparación civil –siendo del caso resaltar que en este extremo prima por completo la disposición sobre el objeto civil- y de las consecuencias accesorias.
- C. La exigencia de una suficiente actividad indiciaria. Ello implica que las actuaciones o diligencias de la investigación permitan concluir que existe base suficiente –probabilidad delictiva- (i) de la comisión de los hechos imputados y de su vinculación con el imputado, y (ii) que están presentes todos los presupuestos de la punibilidad y de la perseguibilidad.

11°. El control de la razonabilidad de la pena está centrado en el examen del quantum de la pena y de la reparación civil objeto del acuerdo. El Juez ha de realizar una valoración que evite que se vulnere, por exceso o por defecto, el principio de proporcionalidad, se lesione la finalidad de la pena o se afecte indebidamente los derechos e intereses legítimos de la víctima. Por consiguiente, sólo podrá rechazar el acuerdo si de modo palmario o evidente se estipule una pena o una reparación civil evidentemente desproporcionada o que en el caso de la pena se lesione ostensiblemente el principio preventivo.

12°. El análisis que corresponde al Juez Penal para homologar el acuerdo que le presentan las partes procesales concernidas es ciertamente distinto a la valoración y examen jurídico penal que hace el Juez en el proceso común luego del juicio oral. En este último el Juez aprecia y valora los actos de prueba y puede aplicar criterios como el in dubio pro reo para absolver al imputado, lo que en cierta medida no es posible en el proceso de terminación anticipada, en atención a los mecanismos reconocidos para su conformación sobre la base del consenso procesal.

Es claro, atento a lo expuesto, que el Juez debe desaprobar el acuerdo si advierte la inexistencia de los hechos, la atipicidad de la conducta atribuida u otra situación similar. Lo correcto en estos casos es que, rechazado el acuerdo, los cargos se diluciden en el proceso común. Es un contrasentido, en atención al ámbito del control jurisdiccional del acuerdo, que se busque una absolución o una decisión que resuelva un objeto distinto al juicio sobre la validez y eficacia jurídica del acuerdo objeto de control jurisdiccional.

§ 4. Beneficios en el proceso especial de terminación anticipada.

13°. La determinación de la pena debe respetar los ámbitos legales referidos tanto a la configuración de la pena básica –definida como la configuración del marco penal establecido por el tipo legal y las diferentes normas que contienen las circunstancias modificativas de la responsabilidad genéricas, sean agravantes y/o atenuantes-, como al establecimiento de la pena concreta o final –que es el resultado de la aplicación de los factores de individualización estipulados en los artículos 45° y 46° del Código Penal, siempre dentro del marco penal fijado por la pena básica y a partir de criterios referidos al grado de injusto y el grado de culpabilidad-.

El acuerdo deberá determinar la pena concreta o final consensuada, cuyo examen, bajo las pautas señaladas líneas arriba –juicios de legalidad y razonabilidad de la pena-, corresponde realizar al Juez.

14°. El artículo 471° NCPP estipula una reducción adicional acumulable de la pena de una sexta parte. Cabe puntualizar que la última frase del citado dispositivo legal precisa que el beneficio en cuestión es adicional y se acumulará al que reciba por confesión. Ésta última es una circunstancia modificativa de la responsabilidad de carácter genérica y excepcional, en tanto permite disminuir la pena hasta en una tercera parte por debajo del mínimo legal (artículo 161° NCPP), que lo que hace es redefinir el marco penal correspondiente, de ahí que es lógica la disposición procesal que la diferencia del beneficio por el acogimiento a la terminación anticipada y, por tanto, no encuentra obstáculo a su acumulación.

Ahora bien, la aplicación del beneficio de una reducción de una sexta parte se refiere a la pena concreta o final. Sobre ésta, una vez definida, es que ha de operar la reducción en una sexta parte –es una pauta de disminución fija y automática, es decir, tasada-. El acuerdo podrá consignarla, pero en todo caso siempre diferenciándola de la pena concreta y final, del resultado final como consecuencia del beneficio aludido, a efecto de que el Juez pueda definir con seguridad y acierto la realidad del beneficio premial y su exacta dimensión.

§ 5. Recursos en el proceso especial de terminación anticipada.

15°. Uno de los principios que regulan el régimen jurídico de los recursos es el de taxatividad, que estipula que la admisión de todo recurso está condicionada a que se encuentre taxativa o expresamente previsto en la ley. Integra el presupuesto procesal objetivo del recurso. En este sentido, cada recurso tiene su propia regulación, pues está diseñado para cada situación específica, en cuya virtud no se admite un recurso cuando corresponde otro, lo que es propio del principio de singularidad.

El gravamen o agravio integra el presupuesto procesal de carácter subjetivo del recurso. La admisión de un recurso está condicionada a que perjudique el derecho o interés legítimo de la parte procesal concernida o impugnante. Ésta, como consecuencia del principio dispositivo –eje esencial del sistema de recursos en toda clase de procesos jurisdiccionales-, debe demostrar argumentalmente el perjuicio o agravio sufrido por la resolución que impugna y el recurso ha de presentarse como el remedio capaz de excluir el perjuicio invocado, que debe provenir de la parte resolutive de la resolución judicial.

16°. El artículo 468°.7 NCPP prescribe que la sentencia anticipada, aprobatoria del acuerdo, puede ser apelada por los demás sujetos procesales –se entiende fuera de Fiscal y del imputado, en tanto en cuanto, respecto de estos últimos, la sentencia anticipada respeta los límites del acuerdo-. Esta norma no se ha pronunciado acerca de la posibilidad de apelación u otro recurso contra el auto que desaprueba el acuerdo. Sin embargo, es de tener en consideración la regla general establecida por el artículo 416°.1 NCPP, que determina como objeto impugnante en apelación los autos que ponga fin al procedimiento o a la instancia –literal b)- o, en su caso, los que causen gravamen irreparable –literal e)-.

No cabe duda de la pertinencia de la aplicación de la regla general del artículo 416°.1. b) y e) NCPP, pues la desaprobación del acuerdo tiene como efecto la culminación del proceso de terminación anticipada y, además, causa un gravamen irreparable porque cancela la vía consensuada y evita la aplicación del beneficio premial. Entender que no es así, por lo demás, vulneraría el derecho a la tutela jurisdiccional en la medida que uno de los elementos que integra su contenido constitucionalmente protegido es el acceso a los recursos legalmente previstos, así como infringiría el debido proceso en el ámbito del derecho al recurso –pluralidad de la instancia- respecto de las decisiones que causan estado.

§ 6. Proceso de terminación anticipada y etapa intermedia del proceso común.

17°. Dentro de la estructura del proceso común, la etapa intermedia es imprescindible. Una de las funciones más importantes que debe cumplir es el control de los resultados de la investigación preparatoria, para lo cual ha de examinar el mérito de la acusación fiscal y los recaudos de la causa con el fin de decidir si procede o no abrir el juicio oral, el procedimiento principal.

El proceso de terminación anticipada no guarda correspondencia con el proceso común. Es un proceso especial sujeto a sus propias reglas de iniciación y con una estructura singular –etapas propias y actuaciones singulares no equiparables con el proceso común, basado en el principio estructural de contradicción y no en el de consenso que informa al primero-. Además, el proceso de terminación anticipada se insta después de expedida la Disposición de Formalización y Continuación de la Investigación Preparatoria y hasta antes de formularse la acusación fiscal (artículo 468°.1 NCPP) y la audiencia especial y privada está sometida a determinadas pautas y ritos, muy distintos a los que rigen la audiencia de control de la acusación, acto de postulación que, a mayor abundamiento, no existe en la terminación anticipada.

18°. El artículo 350°.1.e) NCPP autoriza a las partes procesales, distintas del Fiscal, instar la aplicación, si fuere el caso, de un criterio de oportunidad, entendido en sentido amplio. Se discute si esta norma permitiría que en sede de etapa intermedia se instaure el proceso de terminación anticipada, bajo el entendido de que este último expresa un criterio de oportunidad procesal.

Ya se ha dejado sentado las diferencias sustantivas entre el proceso especial de terminación anticipada y la etapa intermedia del proceso común. El primero tiene como eje el principio del consenso y una de sus funciones es la de servir a la celeridad procesal, mientras que la segunda tiene como elemento nuclear el principio de contradicción y el cuestionamiento –en la medida de lo posible y como alternativa más fuerte de la potestad de control de la legalidad de que está investido el órgano jurisdiccional- de la pretensión punitiva del Ministerio Público. El objeto del principio de oportunidad, entonces, es aquel que busca, en clave material, la dispensa de pena o una respuesta distinta de la reacción punitiva propia del sistema de sanciones del Código Penal, y, como tal, según nuestras normas procesales, sólo puede estar destinada a la aplicación de los supuestos o ‘criterios’ contemplados en el artículo 2° NCPP. Los mecanismos alternativos que buscan respuestas basadas en la idea del consenso (terminación anticipada, conformidad procesal y colaboración eficaz), por su propia especificidad y singularidad, unido a los controles jurisdiccionales que corresponde

realizar, están sometidos a un procedimiento determinado, que no tiene las características, alcances y metodología de la audiencia preliminar de control de la acusación.

Por otro lado, es de acotar que cuando el citado artículo 350°.1.e) NCPP prescribe que en la etapa intermedia se puede aplicar un criterio de oportunidad, tal referencia, sistemáticamente, sólo remite al artículo 2° NCPP. La confusión se debe a que el antecedente directo del principio de oportunidad es el artículo 230° del Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica, que denomina a este dispositivo “criterios de oportunidad”, los cuales, como se observa de su tenor, son los supuestos previstos en el mencionado artículo 2° NCPP.

19°. A mayor abundamiento, la incorporación del proceso de terminación anticipada en la etapa intermedia del proceso común no sólo desnaturaliza su regulación propia y naturaleza jurídica, sino que tergiversa otro eje de su reconocimiento en el proceso penal nacional: la función de acortar los tiempos procesales y evitar las etapas procesales comunes intermedia y de enjuiciamiento, precisamente uno de los fundamentos que permite el beneficio premial de reducción de la pena de una sexta parte. Si se incoa en sede de etapa intermedia no podría aplicarse, en sus propios términos, el artículo 471° NCPP por no cumplir su finalidad político criminal.

20°. La audiencia preliminar de control de la acusación no está diseñada para concretar la terminación anticipada del proceso, pues en la primera solo es obligatoria la asistencia del Fiscal y el defensor del acusado, mientras que la audiencia de terminación anticipada se instalará con la asistencia obligatoria del Fiscal y del imputado y su abogado defensor. En caso de que no concurra el acusado concernido o los otros si fueran causas complejas o seguidas contra varios encausados, sería imposible desarrollar la audiencia de terminación anticipada. Su aceptación obligaría a fijar otra audiencia, con serio desmedro del principio de aceleramiento procesal.

Desde la perspectiva de los demás sujetos procesales también se producen inconvenientes. Al no ser obligatoria la presencia de ellos no se podrían oponer a la realización de esta audiencia, pues como señala el artículo 468°.3 NCPP el requerimiento fiscal o la solicitud del imputado será puesta en conocimiento de todas las partes por el plazo de cinco días, quienes se pronunciarán acerca de la procedencia del proceso de terminación anticipada y, en su caso, formular sus pretensiones. Empero, al aplicar la terminación anticipada en la etapa intermedia tal trámite, indispensable, no será posible.

21°. De lo expuesto en los párrafos anteriores se colige que la incorporación pretoriana de la terminación anticipada en la etapa intermedia afecta gravemente el principio estructural de contradicción procesal, reconocido en el artículo I.1 del Título Preliminar NCPP, comprendido a su vez en la garantía de defensa procesal reconocida en el artículo 139°.14 de la Constitución, desarrollada en el artículo IX del Título Preliminar NCPP. El indicado principio y la garantía procesal aludida integran el Programa procesal penal de la Constitución, que podrían afectarse seriamente si se permite tan insólito proceder, ausente de base legislativa y sustento jurídico procesal.



III. DECISIÓN

22°. En atención a lo expuesto, las Salas Penales Permanente y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la República, reunidas en Pleno Jurisdiccional, por unanimidad, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial;

ACORDARON:

23. ESTABLECER como doctrina legal, los criterios expuestos en los fundamentos jurídicos 7° al 21°.

24°. **PRECISAR** que los principios jurisprudenciales que contiene la doctrina legal antes mencionada deben ser invocados por los jueces de todas las instancias judiciales, sin perjuicio de la excepción que estipula el segundo párrafo del artículo 22° de la LOPJ, aplicable extensivamente a los Acuerdos Plenarios dictados al amparo del artículo 116° del estatuto orgánico.

25°. **PUBLICAR** el presente Acuerdo Plenario en el diario oficial “El Peruano”. Hágase saber.

Ss.

GONZALES CAMPOS

SAN MARTÍN CASTRO

LECAROS CORNEJO

PRADO SALDARRIAGA

RODRÍGUEZ TINEO

VALDEZ ROCA

BARRIENTOS PEÑA

BIAGGI GÓMEZ

MOLINA ORDOÑEZ

BARRIOS ALVARADO

PRÍNCIPE TRUJILLO

NEYRA FLORES



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
V PLENO JURISDICCIONAL PENAL

BARANDIARÁN DEMPWOLF

CALDERÓN CASTILLO

ZEVALLOS SOTO